Al responder cite este número

MJD-OFI20-0012450-DVC-3000

Bogotá D.C., 28 de abril de 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Doctor  **JORGE HUMBERTO MANTILLA SERRANO**  Secretario General  Congreso de la República  Carrera 7 No. 8-68  secretaria.general@camara.gov.co  Ciudad | Contraseña: kT2PBmsspX |

Asunto: Respuesta cuestionarios debate control político radicado MJD-EXT-0017111

Respetado, doctor Mantilla:

Reciba un cordial saludo. De manera atenta y por medio del presente nos permitimos dar respuesta a los cuestionarios derivados de la citación a debate de control político efectuada por la Honorable Cámara de Representantes a través de la proposición No 125 aprobada el 21 de abril de 2020.

**I. Proposición No. 125 de 2020 y anexo**

En atención al cuestionario de control político presentado por los Honorables Representantes Alejandro Vega Pérez, Julián Peinado, Juan Fernando Reyes Kuri, Adriana Gómez, Juan Diego Echavarría, Andrés Calle Aguas, Carlos Ardila y Harry González, esta Cartera Ministerial se permite informarle lo siguiente:

Las preguntas 1 a 25, tratan en gran medida sobre el manejo del COVID-19 en las cárceles, así como de datos acerca del funcionamiento de los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC y de la USPEC de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penitenciario y Carcelario, razón por la cual estas preguntas fueron remitidas a dichas entidades a través de los oficios No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200 y No MJD-OFI20-0012375-DPC-3200.

Finalmente, en relación con la pregunta 26 del cuestionario, que trata sobre el plan del Gobierno Nacional para poner fin a la crisis provocada por el hacinamiento en las cárceles del país, en las unidades de reacción inmediata y en las estaciones de policía, esta Cartera Ministerial se permite señalar que:

El Ministerio de Justicia y del Derecho como cabeza del sector y coordinador de la política penitenciaria y carcelaria, ha sido vinculado a través de diversos fallos judiciales, para coordinar el cumplimiento de múltiples directrices en el avance de la superación del Estado de Cosas Inconstitucional. Particularmente, la Corte Constitucional a través de las sentencias T-388 de 2013 y T-762 de 2015 emitió órdenes y líneas de acción a las autoridades públicas competentes para reformar la política criminal en sus distintas fases.

En efecto, el Gobierno Nacional como garante de los derechos fundamentales, reafirmó su compromiso en cuanto a la superación de estas prácticas inconstitucionales en materia penitenciaria y carcelaria, situación que se refleja en los informes presentados a la Corte Constitucional:

***Primer informe semestral de seguimiento a la sentencia T - 762 del 2015***

Esta providencia reiteró el Estado de Cosas Inconstitucional en el sistema penitenciario y carcelario y, tras identificar sus cinco problemas estructurales, impartió órdenes a entidades de todas las ramas del poder público y, delegó el seguimiento al cumplimiento de las órdenes en un *“Grupo Líder”* conformado por la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Presidencia de la República.

El informe se compone de cinco capítulos: 1) estrategia del Grupo Líder de Seguimiento; 2) informe del Gobierno nacional para la superación del Estado de Cosas Inconstitucional; 3) ejecución de las acciones de la Procuraduría General de la Nación; 4) ejecución de las acciones de la Defensoría del Pueblo y; 5) anexos.

Por efectos metodológicos y atendiendo a las recomendaciones de la Corte, fueron establecidos siete ejes temáticos para presentar la gestión de las entidades de la Rama Ejecutiva: a) adecuación de la política criminal del Estado; b) resocialización; c) salud; d) vida en reclusión y habitabilidad; e) relación nación-territorio; f) brigadas jurídicas; g) presupuesto y plazos de cumplimiento.

***Segundo informe semestral de seguimiento a la sentencia T-762 del 2015***

Para la presentación de este segundo informe, las entidades vinculadas en el fallo, diligenciaron una herramienta diseñada por la Presidencia de la República en la que registraron las acciones implementadas para el cumplimiento del fallo durante el período comprendido entre el 16 de noviembre de 2016 y el 15 de abril de 2017, en temas como, la adecuación de la política criminal del Estado; resocialización; salud; vida en reclusión y habitabilidad; relación nación-territorio; brigadas jurídicas; presupuesto y plazos de cumplimiento.

***Tercer informe semestral de seguimiento a la sentencia T -762 del 2015***

Para la presentación del tercer informe de seguimiento a la Corte Constitucional, la estrategia del Grupo Líder siguió siendo la que se reportó en los dos informes anteriores.

El seguimiento se concentró en lograr la articulación de las entidades relacionadas con la atención de la población privada de la libertad y en determinar el avance de su gestión frente al cumplimiento formal de las órdenes a su cargo.

En ese informe, reportamos que las entidades lideradas por el Ministerio de Justicia y del Derecho trabajaron en la implementación de un primer grupo de indicadores que permitirían iniciar la medición del goce efectivo de los derechos de la población privada de la libertad. En efecto, ya se contaba con indicadores de algunos componentes de la vida en reclusión, que complementarían la labor de seguimiento que se desarrollaba hasta la fecha con acciones encaminadas a identificar avances, cumplimiento de metas específicas en el goce efectivo de los derechos de la PPL y la medición de su impacto, esto es, identificación de resultados acordes a los parámetros fijados por la Corte en la sentencia T-762 de 2015, para determinar el levantamiento del Estado de Cosas Inconstitucional.

***Cuarto informe semestral de seguimiento a la sentencia T-762 del 2015***

En desarrollo de este informe presentamos la información requerida por la Corte Constitucional, así:

* Informe del Comité Interdisciplinario para la estructuración de normas técnicas sobre privación de la libertad.
* Informe del estado actual y cronograma de finalización del proceso de construcción del sistema de información de política criminal.
* Informe de los avances, estancamientos o retrocesos en la estructuración de una política criminal articulada, consistente y coherente, fundada en elementos empíricos y enmarcados constitucionalmente.
* Informe de los avances, estancamientos o retrocesos en el desarrollo de la política pública de concientización ciudadana sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad.
* Informe de los avances, estancamientos o retrocesos con relación a la reclusión conjunta de sindicados y condenados, y a la articulación entre las autoridades nacionales y los entes territoriales en ese tema.

Dicho informe se organizó en tres secciones principales, así:

* Análisis de la política criminal primaria y secundaria, en el que se hizo una presentación general de la situación actual de la política criminal y se presentaron los avances y retos persistentes con relación a la política pública de concientización ciudadana.
* Reporte en materia de criminalización terciaria, que expuso algunos desafíos en la articulación institucional de entidades del sistema penitenciario y carcelario, que son necesarios resolver como punto de partida para una prestación de servicios adecuada a las personas privadas de la libertad. Igualmente, se presentaron algunos avances con relación al enfoque diferencial en el sistema penitenciario y carcelario.
* Balance del trabajo de construcción de tres de los cuatros bastiones del seguimiento del ECI: estructuración de normas técnicas, construcción de indicadores y levantamiento de la línea base.
* Informe detallado de las tareas emprendidas por el Gobierno para la consolidación del Sistema de Información de Política Criminal.

***Quinto informe semestral de seguimiento a la sentencia T-762 del 2015***

Este informe no solo pretendió dar una visión informada desde el nuevo Gobierno de las situaciones evidenciadas en el seguimiento al sistema carcelario y penitenciario, sino, que además buscaba informar a la Corte sobre el compromiso de avanzar y superar los estancamientos presentados hasta este momento, para lograr la superación del Estado de Cosas Inconstitucional.

Se informó a la Corporación, cómo se venía desarrollando un plan de intervención de corto, mediano y largo plazo, como respuesta a múltiples problemáticas identificadas en el sistema penitenciario y carcelario y los avances, estancamientos y retrocesos identificados. Las acciones estaban basadas en el respeto de los derechos humanos, con un enfoque de prevención, desarrollo humano y territorial, que contempla las necesidades particulares de los actores que integran e interactúan en el sistema.

***Sexto informe semestral de seguimiento a la sentencia T - 762 del 2015***

Este informe mostró las acciones que se venían realizando, como son:

• Política criminal: Se trabajó en la creación de indicadores con un eje estructural, transversal a los 6 ejes ordenados por la Corte Constitucional. Dichos indicadores están ligados a todas las fases de criminalización y a la gestión de información para formulación de una política criminal. Como consecuencia de lo anterior, los indicadores resultantes son de los siguientes tipos: i) indicadores de la fase de prevención, ii) indicadores de la fase de criminalización primaria (fase legislativa), iii) indicadores de la fase de criminalización secundaria, iv) indicadores de la fase de criminalización terciaria, e v) indicadores referidos a todas las fases, ligadas a la gestión de la información para la formulación de la política criminal.

**•** Consejo Superior de Política Criminal: Las funciones de dicho órgano son principalmente de asesoría a las autoridades competentes en el proceso de la política criminal – en sus diferentes fases – a partir de la elaboración o contratación de estudios para determinar las causas y dinámicas de la criminalidad y demás asuntos de la política criminal del Estado, con el fin de obtener evidencia empírica para la toma de decisiones, para revisar el estado del sistema penitenciario y carcelario, emitir conceptos previos sobre los proyectos de ley y de acto legislativo que incidan en la materia, así como la preparación de proyectos de ley para adecuar la normatividad a la política criminal y penitenciaria del Estado.

***Séptimo informe semestral de seguimiento a la sentencia T - 762 del 2015***

Cabe resaltar que este informe acogió las observaciones y recomendaciones de los reportes de contraste al sexto informe, presentados por la Procuraduría General de la Nación, Contraloría General de la República, Defensoría del Pueblo y Comisión Civil realizadas a los diferentes ejes temáticos del informe pasado.

Como se indicó, la formulación del documento estuvo basada en una revisión integral de los ejes, por los cuales se aseguran los mínimos constitucionales asegurables de las personas privadas de la libertad, y la búsqueda de soluciones eficaces que sean perdurables en el tiempo, orientadas en un esfuerzo mancomunado interinstitucional donde se armonice y coordine las funciones de las entidades que tienen incidencia en el sistema penitenciario.

El informe abordó inicialmente el eje transversal de política criminal donde se desplegaron una serie de acciones, como la creación del Plan Nacional de Política Criminal y su plan de acción con las diferentes instituciones que conforman el Consejo Superior de Política Criminal y la incidencia de este último, en la presentación de conceptos de evaluación del contenido de proyectos que tengan incidencia en la política criminal.

El segundo eje abarcó la resocialización como fin de la pena, donde se visibilizó el esfuerzo del Ministerio de Justicia y del Derecho en esta materia, así como la visión general de los objetivos a mediano y largo plazo, en el marco de la política criminal del Estado Colombiano. Esta visión se vio reflejada en el diseño de los indicadores de goce efectivo de derechos del eje de resocialización presentado anteriormente a la Corte Constitucional, trabajados conjuntamente con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC-, en donde se definió una serie de indicadores estructurales, de proceso y de resultado para los ámbitos de las dimensiones: i) laboral, ii) educativa, iii) de integración social y familiar, y iv) de recreación, cultura y deporte.

Así mismo, describimos las acciones que ha venido realizando el INPEC en este campo, sorteando las deficiencias que tiene el sistema de una manera propositiva, incluyendo a las demás instituciones y realizando mesas de trabajo, para avanzar en materia de educación, proponiendo un nuevo modelo. Además, evidenciamos las comunidades terapéuticas, el aumento de cobertura de ocupación en actividades de trabajo y enseñanza de la PPL, las acciones destinadas al mejoramiento de la competitividad y calidad de los productos comercializados con la marca Libera COLOMBIA®, el programa pos penitenciario y el enfoque diferencial en el tratamiento penitenciario, con el fin de garantizar los derechos fundamentales de la población privada de la libertad.

El tercer eje del informe abarcó la infraestructura carcelaria y evidenció el plan de acción de la USPEC que busca mitigar el problema de hacinamiento y dar cumplimiento a los estándares en materia de reclusión y resocialización de la población privada de la libertad en los ERON.

Este plan contempla la gestión de nuevos predios para la construcción de establecimientos, desarrollo y ejecución de nuevos proyectos, gestión de recursos, estado de los procesos contractuales, entre otros avances. Así mismo, abarca servicios públicos en el cuarto eje del informe, el cual visibilizó el estado actual de las plantas de tratamiento, los retos y las soluciones que se van aplicar para la vigencia del año 2020.

La alimentación se encuentra como quinto eje del informe, en el cual se hizo un mapeo sobre el sistema de alimentación con sus principales aristas, como lo son: los componentes nutricionales y alimentos, cumplimiento del gramaje, horario de entrega de alimentos, aporte nutricional y enfoque diferencial, entre otros.

Del mismo modo se hizo un estudio actual del modelo de salud, donde señalamos los bloqueos que lo afectan y los planes de contingencias que se están ejecutando y se van a ejecutar para resolver dichos obstáculos en los diferentes campos, como la planta de personal y la realización de brigadas de salud, entre otras.

En cuanto al eje de acceso a la justicia, mostramos el compromiso del Gobierno Nacional para apoyar las diferentes medidas que solventen el hacinamiento del sistema penitenciario. En este caso, la Dirección General del INPEC, en aras de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad, dispuso la creación del “*PLAN PILOTO 10.000”*, situación que originó la priorización de los 20 establecimientos con mayor índice de sobrepoblación carcelaria; dicho enfoque está dirigido a la población privada de la libertad en calidad de condenados, mediante la intervención de tres líneas de acción: jurídica, operativa y de infraestructura. Cabe resaltar que este plan sirvió como insumo para crear el plan de acción, con el fin de llevar a cabo las brigadas jurídicas por parte de la Defensoría del Pueblo.

Como temas trasversales, se encuentra el plan de choque anticorrupción lanzado por el INPEC, enfocado en los ámbitos preventivo, operativo y de gestión administrativa. Otro tema trasversal, es el trabajo que se ha venido realizando con los entes territoriales a través del sistema de priorización solicitado por la Corte Constitucional; este sistema identificó los departamentos con el estado más neurálgico en temas de hacinamiento.

En lo referente a la campaña de concientización ciudadana, informamos el avance de su primera fase, a través de la celebración del contrato interadministrativo No. 0325 de 2019 el pasado 25 de octubre de 2019, suscrito entre la Nación – Ministerio de Justicia y del Derecho y la Universidad Nacional de Colombia, cuyo objetivo es *“desarrollar la estrategia de sensibilización y concientización ciudadana de la política criminal, sobre los fines del derecho penal y de la pena privativa de la libertad, orientados al reconocimiento de los fines de la pena, alternativas sancionatorias, sensibilización sobre la importancia del derecho a la libertad y al reconocimiento de las limitaciones y efectos de la prisión para la resocialización.”*

***Octavo informe semestral de seguimiento a la sentencia T - 762 del 2015***

El 9 de junio de este año, el Gobierno Nacional, deberá radicar el octavo informe de seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucional. Es claro que este informe deberá evidenciar los avances, retrocesos y dificultades que se vienen presentando en cada uno de los ejes.

**II. Proposición No 129.**

En atención al cuestionario de control político presentado por el Honorable Representante Buenaventura León León, esta Cartera Ministerial se permite informarle lo siguiente:

1. **¿Qué ha pasado con el cumplimiento de la Ley 1437 de 2011 que concedió un plazo de 5 años para la implementación del expediente judicial electrónico?**

De conformidad con el parágrafo del artículo 186 de la Ley 1437 de 2011[[1]](#footnote-1), es la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la encargada de implementar el expediente electrónico, razón por la cual se dará traslado de la petición a esta corporación para que dé respuesta a la pregunta.

No obstante, es importante anotar que para el Gobierno Nacional ha sido una prioridad implementar estrategias que permitan una administración de justicia cercana al ciudadano, de allí que se ha abordado este reto como un proceso que involucra reformas legales, administrativas y de gestión, (Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la equidad), que en su conjunto van a permitir acercar la justicia a los ciudadanos, de manera que sus necesidades jurídicas sean debidamente satisfechas.

Así las cosas, una de las metas transformacionales de Gobierno de las que han sido priorizadas por el señor Presidente de la República y que, por tanto, les hace seguimiento directamente la Consejería Presidencial para el Cumplimiento, es el Plan de Transformación Tecnológica de la Rama Judicial, el cual se ha venido liderando desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación, de la Consejería para la Transformación Digital del Estado y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Para ello, se suscribió entre el Gobierno Nacional (Minjusticia y MinTIC) con las Altas Cortes y Consejo Superior de la Judicatura, un memorando de entendimiento y su OTROSÍ de prórroga, que contempla una prueba concepto y una prueba piloto en cinco acciones priorizadas por la Rama Judicial con los aspectos necesarios para lograr un modelo de expediente electrónico que sirva de referente para ser implementado en la mayoría de los trámites judiciales. Hoy contamos con una prueba concepto que dará paso a la contratación de la prueba piloto.

De igual forma, en reunión realizada el 5 de agosto de 2019, convocada por el señor Presidente de la República, con magistrados de Altas Cortes y Consejo Superior de la Judicatura, el Gobierno Nacional anunció el apoyo a la Rama Judicial, para acudir a un empréstito de la banca multilateral, para el desarrollo del proyecto de Expediente Digital y en general el Plan de Transformación Tecnológico en la Rama Judicial. Para el efecto, se adelantaron por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, entre octubre del año pasado y febrero de este año, tres misiones para la estructuración del crédito y nos encontramos junto con la Rama Judicial, impulsando su trámite para contar con esta financiación lo más pronto posible.

En paralelo, el Ministerio de Justicia y del Derecho lidera con el acompañamiento del Ministerio Tic y la Consejería Presidencial para la Transformación Digital del Estado, el proyecto de expediente digital en las entidades públicas del orden nacional con funciones jurisdiccionales, lo cual nos va a permitir la interoperabilidad entre los dos sistemas. Este proyecto se encuentra consignado tanto como meta del Plan Nacional de Desarrollo como en el CONPES 3975 de 2019.

**2. ¿Qué medidas se han adoptado para garantizar el servicio público de justicia?**

El Decreto 417 del17 de marzo de 2020 que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa de la enfermedad coronavirus COVID-19, en la parte considerativa señaló, entre otros aspectos la necesidad de "[…] expedir normas de orden legal que flexibilicen la obligación de atención personalizada al usuario y se permita incluso la suspensión de términos legales en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales", y que "[….] se hace necesario expedir normas que habiliten actuaciones judiciales y administrativas mediante la utilización de medios tecnológicos, y adoptar las medidas pertinentes con el objeto de garantizar la prestación de los servicios públicos de justicia, de notariado y registro, de defensa jurídica del Estado y la atención en salud en el sistema penitenciario y carcelario"

En materia de operatividad del sistema de justicia, se han expedido los siguientes decretos, con los cuales se busca garantizar la continuidad en la prestación del servicio por parte de las autoridades administrativas que cumplen funciones jurisdiccionales en condiciones de seguridad y salubridad para los usuarios y servidores, y el acceso a la administración de justicia a cargo de los distintos despachos judiciales, teniendo en cuenta, en este caso, las reglas que para el efecto ha dispuesto el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del principio de separación de poderes y el respeto a la autonomía e independencia de la Rama Judicial.

* [DECRETO 460 DEL 22 DE MARZO DE 2020](https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20460%20DEL%2022%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf)

Por el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia, dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

* [DECRETO 469 DEL 23 DE MARZO DE 2020](https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20469%20DEL%2023%20DE%20MARZO%20DE%202020.pdf)

Por el cual se dicta una medida para garantizar la continuidad de las funciones de la jurisdicción constitucional, en el marco de la Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

* [DECRETO 491 DEL 28 DE MARZO DE 2020](https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/Decreto-491-28-marzo-2020.pdf)

Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar los servicios de justicia que prestan autoridades administrativas, así como también la continuidad por medios virtuales de la conciliación, el arbitraje, la amigable composición y los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante.

* [DECRETO 546 DEL 14 DE ABRIL DE 2020](https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20546%20DEL%2014%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf)

Por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID-19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

* [DECRETO 564 DEL 15 DE ABRIL DE 2020](https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20564%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf)

Por el cual se adoptan medidas para la garantía de los derechos de los usuarios del sistema de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, suspendiendo los términos de caducidad y prescripción y de desistimiento tácito; previendo además un término adicional de un mes para el inicio del reconteo de dichos plazos en los casos en los cuales el tiempo restante para el cumplimiento de los términos para hacer inoperante la caducidad o interrumpir la prescripción fuere menos a 30 días para el momento en que el Consejo Supeiror suspendió los términos judiciales.

* [DECRETO 567 DEL 15 DE ABRIL DE 2020](https://dapre.presidencia.gov.co/normativa/normativa/DECRETO%20567%20DEL%2015%20DE%20ABRIL%20DE%202020.pdf)

Por el cual se adoptan medidas para proteger los derechos fundamentales de los niños, las niñas y los adolescentes y se asignan a los procuradores judiciales de familia funciones para adelantar los procesos de adopción, como autoridades jurisdiccionales transitorias, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Es importante anotar que en el Acuerdo No. PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que los funcionarios y empleados judiciales laboraran desde sus casas y utilizarán el correo institucional, y que en caso de que el correo no esté habilitado cada despacho judicial designará una persona para que recepcione los documentos que se alleguen.

Así mismo, mediante el Acuerdo PCSJA20-11532 de 11 de abril de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura prorrogó la suspensión de términos judiciales en el territorio nacional, desde el 13 de abril hasta el 26 de abril de 2020 y precisó que "[... ] mientras duren las medidas adoptadas por el Consejo Superior de la Judicatura con ocasión de la emergencia causada por el COVID19, los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas, de conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Decreto 491 de 2020 y el numeral 13 del artículo 3° del Decreto 531 de 2020".

Igualmente, exceptuó de la medida de suspensión de términos los siguientes asuntos y estableció medidas para su continuación por medios virtuales:

" [ ...] 1. Acciones de tutela y habeas corpus. Se dará prelación en el reparto a las acciones de tutela que versen sobre derechos fundamentales a la vida, la salud y la libertad. 2. Las actuaciones que adelante la Corte Constitucional con ocasión de la expedición de decretos por el Presidente de la República en ejercicio de las funciones del artículo 215 de la Constitución Política. 3. Las actuaciones que adelanten el Consejo de Estado y los tribunales administrativos con ocasión del control inmediato de legalidad que deben adelantar de conformidad con las competencias establecidas en el artículo 20 de la Ley 137 de 1994 y en los artículos 111, numeral 8, 136 Y 151, numeral 14, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. 4. Con relación a la función de control de garantías se atenderán los siguientes asuntos: a. Audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitudes de medidas de aseguramiento de detención. b. Prórroga, sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento cuya solicitud sea con persona privada de la libertad, siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual. c. Libertad por vencimiento de términos, siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual. d. Control de legalidad posterior, siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual. 5. Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad atenderán las libertades por pena cumplida, con o sin redención de pena, libertad condicional, prisión domiciliaria y formalización de la reclusión, mediante trabajo en casa de manera virtual. 6. La función de conocimiento en materia penal atenderá las audiencias programadas con persona privada de la libertad, siempre que las audiencias se puedan adelantar mediante trabajo en casa de manera virtual. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia además continuará atendiendo los trámites que impliquen la libertad inmediata de los procesados en asuntos de casación, extradición, impugnación especial, revisión, definición de competencia, segunda instancia y casos próximos a prescribir, privilegiando el uso de medios electrónicos. La Sala Especial de instrucción de la Corte Suprema de Justicia continuará atendiendo las actuaciones, audiencias y sesiones en las investigaciones en curso, privilegiando el uso de los medios electrónicos"; y los siguientes procesos: 1. Con relación a la función de control de garantías se atenderán de manera virtual las solicitudes de orden de captura. 2. Los procesos de adopción en aquellos casos en los que se haya admitido la demanda. 3. Las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar, cuando en el lugar no haya comisario de familia. 4. La función de conocimiento en materia penal atenderá virtualmente el trámite de solicitudes de libertad de su competencia.

Finalmente, el pasado 25 de abril el Consejo Superior de la Judicatura prorrogó hasta el 10 de mayo la suspensión de términos, ampliando las excepciones en las diferentes jurisdicciones y promoviendo el trabajo en casa por medios virtuales.

Al margen de lo anterior, frente a los temas respecto de los cuales no tiene competencia, el Ministerio de Justicia ha venido formulando propuestas al Consejo Superior de la Judicatura, esto en desarrollo del principio de colaboración armónica previsto en el artículo 116 de la Constitución Política, entendiendo que el funcionamiento de la Rama Judicial fortalece la democracia. Propusimos el trabajo en casa de las actuaciones que puedan adelantarse de esta manera por medios virtuales; la reanudación de ciertos procesos judiciales que son de importancia para el ciudadano, como las adopciones, las acciones populares, de cumplimiento, de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho; procesos laborales sobre despidos injustificados o suspensión de contratos; asuntos pensionales; asuntos de familia; casos pendientes de proferir sentencia o aquellos en los que está se pueda dictar de forma anticipada, entre otras.

El Consejo Superior en efecto ha venido reanudando de manera escalonada las actuaciones y procesos que dentro de sus capacidades resulta responsable reabrir.

**3. ¿Qué medidas se han habilitado para la radicación de tutelas, habeas corpus, y demás ordenes que no quedaron suspendidas por orden del Consejo Superior de la Judicatura?**

El Consejo Superior de la Judicatura, como órgano de gobierno y administración de la Rama Judicial ha venido adoptando las medidas relacionadas con el funcionamiento de los despachos judiciales en los mismos acuerdos en los cuales ha ordenado la suspensión de términos judiciales. El Gobierno nacional, por su parte le ha planteado al Consejo Superior de la Judicatura algunas propuestas encaminadas a dinamizar la actuación de la administración de justicia en el contexto actual del estado de emergencia sanitaria y de cara a la reactivación una vez se levanten las medidas de aislamiento preventivo obligatorio, con total respeto por la autonomía e independencia de la Rama Judicial y ánimo colaborativo.

En relación con los mecanismos para la radicación de acciones de tutela, hábeas corpus y demás actuaciones exceptuadas de la suspensión de términos, la Rama Judicial adoptó unas medidas virtuales para continuar prestando el servicio sin vulnerar derechos constitucionales, así:

1. Servicio de Audiencias Virtuales, Videoconferencias y Streaming

2. Correo electrónico y Herramientas colaborativas

3. Sistema de Gestión de Correspondencia SIGOBius

La finalidad es que cada región del país pueda seguir operando sin asistir físicamente a las sedes judiciales.

De manera particular, mediante la Circular PCSJC20-11, de 31 de marzo pasado, el Consejo Superior de la Judicatura brindó información detallada a los servidores de la Rama Judicial sobre el correcto y preferente uso de las herramientas tecnológicas que pueden apoyar sus labores, en el marco de las medidas adoptadas para afrontar la Emergencia Económica, Social y Ecológica.

Además, para consultar o profundizar el funcionamiento de estas herramientas, los usuarios pueden acceder a: https://www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/medidas-covid19

Es importante anotar que en el Acuerdo No. PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020, el Consejo Superior de la Judicatura dispuso que los funcionarios y empleados judiciales laboraran desde sus casas y utilizarán el correo institucional, y que en caso de que el correo no esté habilitado cada despacho judicial designará una persona para que recepcione los documentos que se alleguen. Igualmente, no se han suspendido los servicios de información sobre el estado de los procesos judiciales como es Siglo XXI.

De igual el Consejo Superior de la Judicatura determinó que las autorizaciones de pago de títulos por concepto de alimentos, con o sin orden permanente de pago, serán atendidas de forma virtual como medida para atender las necesidades de los usuarios de la administración de justicia por emergencia del COVID-19, para tales efectos habilito en cada distrito judicial correos electrónicos para el pago de títulos por concepto de alimentos.

Mediante Circular PCSJ20-15 se expidió protocolo para el manejo de documentos físicos, indicando las medidas ha implementarse en cada uno de los despachos judiciales respecto al retiro de expedientes físicos (judiciales y administrativos)

**3.1 ¿Cómo se han difundido las formas de acceder a la justicia en las actuaciones que no quedaron suspendidas por el Consejo Superior de la Judicatura?**

El Ministerio de Justicia y del Derecho en su deber de acercar la justicia a los ciudadanos en especial en este tiempo de Estado de Emergencia Sanitaria, a través del uso de las herramientas digitales promueve el conocimiento de las medidas impartidas por el Gobierno Nacional por Covid-19 de la siguiente manera:

1. *LegalApp “Guía de trámites y servicios de justicia a tan solo un clic”.*



Los colombianos encontrarán tanto en la página web ([www.legalapp.gov.co](http://www.legalapp.gov.co)) y como en su aplicativo móvil las medidas del Gobierno Nacional expedidas durante el tiempo de cuarentena, explicadas desde un lenguaje fácil y sencillo, libre de cualquier tecnicismo jurídico. En esta herramienta se habilito una categoría denominada “Medidas Covid-19”, allí los usuarios podrán informarse sobre qué hacer y donde acudir frente a situaciones como:

* ¿Cómo presentar una acción de tutela durante las medidas de aislamiento por covid 19?
* ¿Cómo presentar una acción de habeas corpus durante las medidas de aislamiento por covid 19?
* ¿Cómo puedo reclamar la pensión durante la emergencia por Covid -19?
* ¿En qué consiste la devolución del IVA y cómo puedo saber si soy beneficiario?
* ¿Cómo tramitar los derechos de petición durante la emergencia sanitaria por Covid-19?
* ¿Qué hacer para renovar permisos, licencias, autorizaciones o certificados, durante la emergencia por Covid-19?
* ¿Cómo se prestará el servicio notarial durante la emergencia por covid-19?
* ¿Cómo se notifican los actos administrativos durante la emergencia por Covid-19?
* ¿Las comisarías de familia siguen brindando atención durante la emergencia por Covid-19?

Adicional a ello a través de las redes sociales y los canales informativos de LegalApp se propende por llevar una cultura de prevención sobre el contagio, informando de manera permanente sobre: (i) la importancia del lavado de manos, (ii) las personas exceptuadas del cumplimiento de la medida de aislamiento social obligatorio y (iii) las sanciones a las que pueden impartirse a los infractores de la medida.

De otra forma siendo conscientes de las necesidades de orientación en materia de justicia, LegalApp a través de su alianza con consultorios jurídicos del país, busca que con el uso de herramientas tecnológicas como Meet, Skype, Microsoft Teams, Zoom y similares se puedan desarrollar asesorías legales virtuales por parte de los estudiantes de consultorio jurídico, logrando que no se vea interrumpida la atención de este servicio que beneficia de forma especial a población vulnerable, que junto con ello se apueste a la continuidad en los procesos de formación de los estudiantes de derecho a través de prácticas virtuales.

*2. Suin Juriscol “Ventana Normativa del país al alcance de su mano”.*

En el Sistema Único de Información Normativa del Estado colombiano (Suin Juriscol) que permite ubicar de forma rápida y gratuita, normas de carácter general y abstracto, le apuesta para que la ciudadanía y operadores de justicia conozcan las normas que ha expedido el Gobierno Nacional dentro del estado de emergencia sanitara.



Ingresando a [www.suin-juriscol.gov.co](http://www.suin-juriscol.gov.co), en su sección de “Derecho Vigente” de forma gratuita los usuarios tendrán al alcance de su mano el cajón normativo sobre Covid-19. Allí encontraran más de 103 Decretos Legislativos, 30 Circulares, 04 Directivas Presidenciales y 40 Resoluciones expedidas por el Gobierno Nacional durante el estado de Emergencia por Covid-19. Esta información se comparte de forma permanente con las bases de datos alcaldías y operadores de justicia local del país a través del uso de redes sociales y emaling masivos del boletín informativo denominado “Ventana al Derecho”.

Ahora bien, se ha dispuesto esta plataforma para que las Gobernaciones y Alcaldías del país remitan al Ministerio de Justicia sus normas de carácter departamental y municipal para que sean debidamente cargas dentro del sistema y se acompañen en ejercicios de promoción y divulgación virtual. Logrando con ello que no haya excusa para que los ciudadanos y autoridades conozcan las normas en el marco de esta emergencia.

1. *Conexión Justicia.*

Conexión Justicia ([www.minjusticia.gov.co/conexionjusticia](http://www.minjusticia.gov.co/conexionjusticia)), es un espacio web en el que los comisarios de familia, inspectores de policía y corregidores del país cuentan con información necesaria y de interés para el fortalecimiento de sus competencias. Allí se ha trabajado en el proceso de socialización y divulgación del Decreto 460 de 2020, ordenando la prestación ininterrumpida de las Comisarias de Familia en todo el territorio nacional, logrando con ello que no se tregua a escenarios de violencia intrafamiliar y de género durante el tiempo de aislamiento preventivo obligatorio.

Es así como se ha desarrollado una estrategia de promoción y divulgación de esta norma, dirigida a la base de datos de comisarías de familia e inspecciones de policía del país a través del suministro de piezas de informativas, así como de un abecé sobre los asuntos destacados que deben conocer los comisarios de familia y su grupo de trabajo sobre esta norma. En especial en los que se relacionan asuntos propiamente en materia de funciones, instalaciones y traslados en la atención de casos en materia de violencia de género y violencia intrafamiliar en los territorios durante el proceso de cuarentena.

Esta estrategia comunicativa propende por proteger la salud del personal que labora en las comisarías de familia y los usuarios de las mismas, dándole a conocer sobre la flexibilización en la atención personalizada casos y, por tanto, motivándolas en el uso a medios tecnológicos, sin que el servicio pueda interrumpirse. En este contexto, se le informar que los alcaldes deberán ofrecer transporte adecuado para trasladar a los usuarios afectados a lugares de protección y aislamiento; así como de disponer de medios telefónicos y virtuales destinados exclusivamente a que las comisarías brinden orientación jurídica y sicosocial permanente; y el deber de implementar protocolos de recepción de denuncias, a través de líneas telefónicas y plataformas virtuales, medios que también deberán garantizarse para la realización de audiencias, notificaciones y citaciones, entre otras acciones.

1. *Tejiendo Justicia (Red Universitaria por la Igualdad, Inclusión y Transparencia)*

Tejiendo Justicia, red que se ocupa de fortalecer la gestión institucional y universitaria para aportar a la construcción de una sociedad jurídica que garantice la debida diligencia en el abordaje de los derechos de las personas con discapacidad, la transparencia y el enfoque de género, mediante la articulación de la investigación, la práctica y el conocimiento generado alrededor de estos temas enmarcados en los derechos humanos y la justicia inclusiva, dentro del estado de emergencia y en asocio con su red consultorios jurídicos aliados, promueve el conocimiento en las facultades de derechos y de manera especial en los estudiantes de las medidas decretas por el Gobierno Nacional, por ello se ha remitido a las bases de datos de las instituciones educativas las campaña #MujeresSegurasEnCasa, dando a conocer la línea gratuita nacional 155 donde las mujeres y la familia pueden contar con orientación personalizada en casos de violencia de género y violencia intrafamiliar. De igual manera se remitió el abecé sobre Decreto 460 de 2020.

Desde el 1ro., de marzo se lleva a cabo la capacitación virtual en género en municipios PDET, así como la capacitación en prevención de la violencia intrafamiliar a comisarios, conciliadores en equidad y organizaciones de mujeres.

Ahora bien, el Consejo Superior de la Judicatura lanzo el subsitio COVID19 dentro de la pagina web de la Rama Judicial (/www.ramajudicial.gov.co/web/medidas-covid19/), este espacio tiene como propósito dar a conocer tanto a los jueces y magistrados, servidores judiciales, abogados litigantes y ciudadanos las medidas adoptadas en relación con el Covid19 dentro de la administración de justicia. Dentro de los contenidos de la plataforma se encuentran cada uno de los Acuerdos, Circulares y Comunicados expedidos durante el estado de emergencia, así como videos e infografías sobre las medidas adoptadas y las relacionadas a una campaña de protección y prevención del contagio a través de una cultura de buenos hábitos.

No sin antes manifestar que tanto las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional, como por la Rama Judicial, son de permanente difusión a través de boletines de prensa, redes sociales (Twitter, Facebook e Instagram), así como a través de correos masivos a bases de datos de público objetivo.

Las preguntas 4 y 5, portan en gran medida sobre el manejo del COVID-19 en las cárceles, así como de datos acerca del funcionamiento de los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penitenciario y Carcelario, razón por la cual estas preguntas fueron remitidas a esa entidad a través del oficio No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200.

**III. Proposición No. 135**

En atención al cuestionario de control político presentado por el Honorable Representante Óscar Sánchez León, esta Cartera Ministerial se permite informarle lo siguiente:

Respecto a la primera pregunta referente a ***¿Cuáles son los mecanismos o las estrategias diseñadas por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho y el INPEC, para que las personas privadas de la libertad retornen a las cárceles pasados el término que estableció el decreto.*** Esto en atención a lo estipulado en el artículo 13.

Sobre este punto debe indicarse que vencido el término de la medida de detención o prisión domiciliarias transitoria, esto es de seis meses, el destinatario de la misma deberá presentarse, en él término de (5) días hábiles, en el establecimiento penitenciario o carcelario o al lugar de reclusión en el que se encontraba al momento de su otorgamiento.

Si trascurridos los (5) cinco días no se hiciere presente, el director del establecimiento penitenciario o carcelario o el lugar de reclusión en el que se encontraba le comunicará al Juez competente quién decidirá lo pertinente. En tal sentido, la persona asumirá las consecuencias penales que esto implica y la reactivación de la orden de captura en su contra.

Respecto a la segunda pregunta referente a ***¿Cuáles son los tratamientos diferenciales que tiene estipulado el Ministerio de Justicia y del Derecho, para los adultos mayores de 65 años, las mujeres embarazadas o gestantes y las personas con enfermedades terminales, que no estén en ninguna de las excepciones planteadas en el decreto pero que por su condición presentan un mayor riesgo de contagio?*** Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.

En relación con las personas que se encontraren en cualquiera de las situaciones descritas, que no sean beneficiarias de la prisión o de la detención domiciliaria transitorias por encontrarse inmersas en las exclusiones de que trata el artículo 6 del decreto junto con sus parágrafos, serán ubicadas en lugares especiales determinados por el INPEC con miras a garantizar sus derechos y la minimización del eventual riesgo de contagio.

De esta manera, el INPEC dispuso en la mayoría de establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden nacional de zonas de aislamiento, asi como la USPEC dotará los establecimientos con carpas medicalizadas para ubicar allí a esta población que es más vulnerable. De igual manera y citando como ejemplo el caso del ERON de Villavicencio, producto del consejo de seguridad celebrado el pasado viernes 24 de abril de 2020, la Gobernación del Meta y la Alcaldía Municipal de Villavicencio, en el marco de su corresponsabilidad en esta materia, colocaron a disposición de manera transitoria un inmueble con capacidad para noventa (90) personas, donde funcionará un centro de detenciones para menores infractores, en el cual se trasladarán personas vulnerables al COVID 19.

Respecto a la tercera pregunta sobre ***¿Cuáles son las estrategias que maneja el Ministerio y el INPEC, para que se tenga certeza de que los reclusos están en el lugar de domicilio asignado?*** Lo anterior, teniendo en cuenta las disposiciones del parágrafo del artículo 13, en la cuál establece que podrán acceder a las medidas sin ser necesario disponer del dispositivo de seguridad electrónica.

En primera medida es necesario recordar que este Ministerio, como cabeza de sector de justicia y del derecho, tiene dentro de sus funciones la de formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar la política pública en materia de asuntos carcelarios y penitenciarios, entre otras.

De esta manera, el decreto legislativo fue claro al señalar que el control del cumplimiento de la detención domiciliaria y prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia del beneficiario, estará a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC, el cual realizará la verificación periódica sobre el cumplimiento y reportará a la autoridad judicial competente.

En tal sentido, el INPEC será en encargado de trasladar hasta el lugar de residencia consignado en el acta de compromiso a la persona privada de la libertad beneficiaria de la medida y como se indicó realizará la verificación periódica correspondiente.

Con relación a las preguntas 4, 5 y 6 del cuestionario sobre solicitud de información en aspectos referentes a recursos humanos, financieros, humanos y técnicos para realizar traslados de los reclusos en los cuales su lugar de domicilio no es el mismo lugar en el que se encuentran recluidos, sobre capacidad técnica, financiera y recursos humanos del USPEC para llevar a cabo asistencias médicas de los reclusos que cobija el decreto, así como la coordinación y estrategias de la USPEC en el caso en el que el recluso se encuentra fuera de su lugar de domicilio y el tratamiento médico que se debe realizar en otro lugar, son cuestiones de competencia del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -INPEC y, de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios -USPEC, razón por la cual estas preguntas fueron remitidas a dichas entidades a través de los oficios No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200 y No MJD-OFI20-0012375-DPC-3200.

**IV. Proposición 136**

En atención al cuestionario de control político presentado por la Bancada del Partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), esta Cartera Ministerial se permite informar lo siguiente:

1. **Ante el aumento en los casos y denuncias por violencias basadas en género, ¿Cuál es el protocolo de atención a las víctimas, y cómo se ha ajustado en el marco del Aislamiento Preventivo Obligatorio?**

Respecto las funciones específicas que tiene el Ministerio frente a las Comisarías de Familia, el artículo 17 del Decreto 1427 de 2017 establece que la Dirección de Justicia Formal tiene la función de *“definir lineamientos técnicos en materia de competencias, procedimientos y acciones relacionadas con las funciones de atención a la violencia basada en género por parte de las Comisarías de Familia, así como apoyar el diseño y coordinación de las políticas para el ejercicio de la función jurisdiccional a cargo de autoridades administrativas y de otras entidades*.”

Las Comisarías de Familia son entidades distritales, municipales o intermunicipales de carácter administrativo e interdisciplinario, que forman parte del Sistema Nacional de Bienestar Familia, cuya misión es prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los miembros de la familia conculcados por situaciones de violencia intrafamiliar, para lo cual deben seguir los procedimientos señalados en la Ley 294 de 1996, modificada por las Leyes 575 de 2000 y 1257 de 2008, el Decreto 1069 de 2015, y la Ley 1098 de 2006 modificada por la Ley 1878 de 2018.

* **Ruta de atención en Comisarías de Familia.**

La solicitud de la medida de protección la puede presentar la persona agredida, otra que actúe en su nombre o por del defensor de familia cuando la víctima se encuentre en imposibilidad de hacerlo por sí misma.

La solicitud se puede presentar de manera escrita, verbal o por cualquier medio idóneo, a más tardar dentro de los treinta (30) días siguientes al acaecimiento de los hechos,[[2]](#footnote-2) excepto cuando la víctima manifiesta bajo la gravedad de juramento que por actos de fuerza o violencia del agresor, estaba imposibilitada para comparecer.[[3]](#footnote-3)

El Comisario avocará inmediatamente la petición y cuando esta esté fundada en al menos indicios leves, podrá dictar dentro de las cuatro (4) horas siguientes medidas de protección en forma provisional, tendientes a evitar la continuación de los actos de violencia, agresión, maltrato, amenaza y ofensa contra la víctima. Contra la medida de protección no procede recurso alguno[[4]](#footnote-4).

El comisario podrá solicitar la práctica de una prueba pericial, técnica o científica, a peritos oficiales, quienes rendirán dictamen de acuerdo con los procedimientos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (INMLCF).[[5]](#footnote-5)

Los dictámenes se podrán solicitar al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en sus diferentes sedes distribuidas en todo el territorio nacional. En los lugares donde no exista dependencia de Medicina Legal, podrán solicitarse a los médicos oficiales y del Servicio Social Obligatorio. La práctica de estos dictámenes no generará ningún costo para las personas a quienes se les practique.[[6]](#footnote-6)

El Comisario deberá citar al acusado a audiencia entre los cinco (5) y diez (10) días siguientes a la radicación de la solicitud de imposición de la medida de protección.[[7]](#footnote-7)

Cuando la víctima sea una persona con discapacidad o en estado de indefensión, se notifica también a la Personería Municipal o Distrital. La ausencia del Personero o su delegado no impide la realización de la audiencia y constituye una falta disciplinaria grave.[[8]](#footnote-8)

El comisario de familia deberá instalar la audiencia en un término que no puede exceder los diez (10) días contados a partir de la fecha de presentación de la petición de protección. En esta audiencia se practicarán las pruebas y se tomarán decisiones de fondo.[[9]](#footnote-9)

Las mujeres víctimas de violencia tienen derecho a decidir voluntariamente si quieren ser confrontadas con el agresor en cualquiera de los espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.[[10]](#footnote-10)

Si el agresor no comparece a la audiencia se entenderá que acepta los cargos formulados en su contra.[[11]](#footnote-11) Si una o ambas partes no asisten a la audiencia, ni presentan excusa válida de su inasistencia, la audiencia se celebrará para decretar y practicar las pruebas solicitadas por las partes y las que de oficio, y dictará la providencia que corresponda al finalizar la audiencia.[[12]](#footnote-12)

El comisario de familia deberá dictar una providencia motivada, breve y precisa, la cual debe incluir en la parte resolutiva la medida definitiva de protección [[13]](#footnote-13). Esta providencia será notificada a las partes en estrados, si no está alguna de las partes, se le comunicará la decisión por aviso o cualquier otro medio idóneo. De esta actuación se dejará constancia en acta y se entregará copia a cada una de las partes.[[14]](#footnote-14)

Las medidas de protección que puede imponer el Comisario de Familia, además de ordenar al agresor abstenerse de realizar la conducta objeto de queja, son las siguientes[[15]](#footnote-15):

1. Ordenar al agresor el desalojo de la casa de habitación que comparte con la víctima:

Cuando la presencia del agresor es una amenaza para la vida, la integridad física o la salud de cualquiera de los miembros de la familia.

El comisario de familia enviará copia de la medida provisional o definitiva a la persona encargada de la vigilancia del lugar de habitación, al Consejo de Administración o al Comité de Convivencia, al propietario, arrendador o administrador o a quien tenga la administración del inmueble, para que adopten las medidas pertinentes, con copia a la Policía Nacional, con el fin de evitar el acceso al lugar por parte del agresor.

Cuando no exista un sistema de control de ingreso al lugar de habitación, el Comisario de Familia deberá oficiar a la Policía Nacional para que garantice el cumplimiento de la orden.

1. Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la víctima:

Cuando a juicio del funcionario dicha limitación resulte necesaria para prevenir que el agresor perturbe, intimide, amenace o de cualquier otra forma interfiera con la víctima.

A solicitud de la víctima, su representante, apoderado o solicitante, el comisario de familia enviará la orden de fijación de la medida a los sitios que la víctima determine, para que los encargados del control de entrada y salida del personal, el propietario, arrendador, administrador o quien se haga cargo del inmueble, evite el ingreso del agresor.

Cuando no haya control de ingreso al inmueble, el comisario de familia oficiará a la Policía Nacional para que se garantice la medida.

1. Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y adolescentes, y personas con discapacidad en situación de indefensión, sin perjuicio de las acciones penales a que hubiere lugar.

El comisario de familia oficiará al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que informe a todos los centros zonales, con el fin de impedir el otorgamiento de custodias a favor de los agresores.

1. Obligación de acudir a un tratamiento reeducativo y terapéutico en una institución pública o privada que ofrezca tales servicios, a costa del agresor.

1. Ordenar al agresor el pago de los gastos de orientación y asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima.

El Estado garantizará los servicios previstos en los numerales 4 y 5[[16]](#footnote-16). Cuando en casos excepcionales la víctima asuma los costos de estos servicios, se liquidarán los pagos a cargo del agresor de la siguiente manera:

La víctima deberá acreditar los pagos realizados, para que el comisario de familia ordene en la misma providencia que imponga la medida de protección, el reintegro a la víctima de los gastos realizados.

El Comisario deberá ordenar que el agresor acredite ante su despacho los pagos a su cargo.

El no pago se entenderá como incumplimiento y dará lugar a las sanciones del artículo 4° de la Ley 575 de 2000 (multa, arresto)

1. Protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo si lo tuviere. Cuando la violencia o maltrato revista gravedad y se tema su repetición.

1. Ordenar a la autoridad de policía, previa solicitud de la víctima, el acompañamiento a esta para su reingreso al lugar de domicilio cuando ella se haya visto en la obligación de salir para proteger su seguridad.

Cuando corresponda a la Policía Nacional la ejecución de la implementación de las medidas de protección de los numerales 6 y 7 [[17]](#footnote-17)se realizará de manera concertada con la víctima, en atención a los principios de los programas de protección de Derechos Humanos y a los siguientes criterios:

* + - * Atender las circunstancias particulares de riesgo.
      * Cumplimiento de la orden contenida en la medida de protección.
      * Responsabilidad del Estado en la protección de los derechos de las mujeres.

1. Decidir provisionalmente el régimen de visitas, la guarda y custodia de los hijos e hijas si los hubiere, sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades.

Cuando el comisario de familia adopte medidas relacionadas con el derecho a las visitas o custodia de los hijos e hijas deberá tener en consideración la existencia del contexto de violencia, para no poner en peligro la seguridad y la vida de las víctimas. Además, deberá adoptar un enfoque de género y no “familista”, es decir, que la decisión se deberá fundamentar en el interés superior de los niños, las niñas y los adolescentes, y en los derechos fundamentales de la mujer, sin presumir que el único medio para lograr el desarrollo de los niños y las niñas es implementando un régimen de visitas.[[18]](#footnote-18)

1. Suspender al agresor la tenencia, porte y uso de armas; en caso de que estas sean indispensables para el ejercicio de su profesión u oficio, la suspensión deberá ser motivada.

El comisario de familia deberá informar a la Policía Nacional y a las autoridades competentes la medida.

1. Decidir provisionalmente quién tendrá a su cargo las pensiones alimentarias. Sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades.
2. Decidir provisionalmente el uso y disfrute de la vivienda familiar.

Sin perjuicio de la competencia en materia civil de otras autoridades.

1. Prohibir al agresor la realización de cualquier acto de enajenación o gravamen de bienes de su propiedad sujetos a registro, si tuviere sociedad conyugal o patrimonial vigente.

El comisario de familia solicitará al Juez de Familia o en su defecto al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal que ordene la medida. Deberá mediar petición por parte de la víctima en la que identifiquen los bienes.

Cuando la víctima no tenga esta información, se oficiará a los organismos competentes para que suministren la información necesaria en un plazo máximo de tres (3) días hábiles.

1. Ordenar al agresor la devolución inmediata de los objetos de uso personal, documentos de identidad y cualquier otro documento u objeto de propiedad o custodia de la víctima.
2. Remitir a la víctima y a sus hijas e hijos a un sitio donde encuentren la guarda de su vida, dignidad, e integridad y la de su grupo familiar.
3. Ordenar el traslado de la institución carcelaria o penitenciaria para las mujeres privadas de la libertad

El Comisario de Familia podrá solicitar en forma escrita el acompañamiento de la Policía Nacional para hacer efectivas las medidas de protección.

1. Todas las demás que cumplan con el objetivo de garantizar a las mujeres una vida libre de violencias.

Para garantizar el cumplimiento de las medidas de protección, el comisario solicitará la colaboración de la Policía Nacional, quien deberá elaborar el protocolo de riesgo de la situación particular de la víctima, y elaborar un registro nacional donde se incluirá la información sobre las medidas de protección, apoyo policivo ordenado por la autoridad competente y acta entregada a la víctima conforme el artículo 20 de la Ley 294 de 1996.[[19]](#footnote-19)

Las medidas de protección tendrán vigencia por el tiempo que se mantengan las circunstancias que dieron lugar a estas y serán terminadas mediante un incidente por el funcionario que las impuso.

Adicionalmente, el Comisario de Familia debe remitir todos los casos de violencia intrafamiliar a la Fiscalía General de la Nación para efectos de la investigación del delito de violencia intrafamiliar y posibles delitos conexos.

* **Lineamientos de atención.**

Desde las competencias del Ministerio de Justicia y del Derecho se han construido los siguientes lineamientos:

1. Resolución 163 del 6 de marzo de 2013 “*Por la cual se establecen los lineamientos técnicos en materia de competencias, procedimientos y acciones relacionadas con las funciones de la atención a las víctimas de la violencia basada en género, por parte de las comisarías de Familia y otras autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales*” y su anexo “*Justicia y Género. II Lineamientos técnicos en violencias basadas en género para las comisarías de familia*”.
2. Instrumentos para la atención y prevención de la violencia de género. Ministerio de Justicia y del Derecho y Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer. 2015.

Este documento contiene los instrumentos de valoración del riesgo, seguimiento a las medidas de protección y atención, estándares de calidad y rutas para el proceso de atención.

1. Guía Pedagógica para Comisarías de Familia sobre el procedimiento para el abordaje de la violencia intrafamiliar con enfoque de género. Ministerio de Justicia y del Derecho.

* **Protocolo de atención.**

El Ministerio de Justicia y del Derecho construyó la Guía de Atención a Mujeres y Personas LGBTI en los Servicios de Acceso a la Justicia. La Guía fue publicada el 25 de noviembre de 2019, con ocasión de la conmemoración del día de la no violencia hacia las mujeres. Esta iniciativa busca determinar los criterios mínimos a tener en cuenta por quienes hacen parte de la cadena de atención a las mujeres en los servicios de justicia, de suerte que se logre evitar la revictimización, los prejuicios, estereotipos y la posible tolerancia e indiferencia de los servidores ante los casos de violencia basada en género.

Este documento está compuesto por las siguientes secciones:

1. Conceptos para la comprensión del género, sexo, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, violencia de género, prejuicios y estereotipos.
2. Los referentes para la atención inclusiva a mujeres y personas LGBTI, relacionados con los elementos y las herramientas necesarias para garantizar la igualdad, dignidad y derechos fundamentales, así como asegurar una atención diferenciada, independiente e imparcial.
3. Los elementos necesarios para asegurar que la atención a las mujeres y personas LGBTI sea diligente, integral y digna, garantice la intimidad y la confidencialidad, el respeto de la identidad de género y la orientación sexual, y un trato diferencial respecto de los riesgos especiales que sufren las lideresas y defensoras de derechos humanos.
4. Las acciones que no deben realizarse en la atención a mujeres y población LGBTI, con el objetivo de erradicar todas aquellas prácticas que pueden causar discriminación, amenaza o vulneración de derechos y violencia institucional contra esta población.
5. Los pasos que se recomienda tener en cuenta en la atención a mujeres y personas LGBTI, relacionados con la identificación y eliminación de barreras en la prestación del servicio de justicia, el recibimiento de la persona usuaria, la recepción del caso, asesoramiento y competencia, direccionamiento cuando se debe remitir el caso a otra entidad, y el uso del lenguaje incluyente como una forma de promover y respetar la igualdad de género.

* **Atención a víctimas en el marco del aislamiento preventivo obligatorio.**

Con el liderazgo del Ministerio de Justicia y del Derecho, el Presidente de la República expidió el Decreto 460 del 22 de marzo de 2020, mediante el cual se dictan medidas para garantizar la prestación del servicio a cargo de las comisarías de familia en el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, que se decretó para hacer frente a las circunstancias imprevistas de la crisis económica y social generada por la pandemia del COVID-19.

El Gobierno Nacional ordenó a los alcaldes municipales y distritales garantizar la prestación ininterrumpida de las funciones de comisarías de familia, para que se priorice la atención y la protección en casos de violencias en el contexto familiar y adopción de medidas urgentes para la protección integral de niños, niñas y adolescentes.

Este Decreto no impone nuevas funciones a las Comisarías de Familia, busca que se priorice la protección integral de las víctimas de violencia en el contexto familiar y toma medidas para evitar contagios de COVID-19, por ello ordena a las alcaldías distritales y municipales garantizar las herramientas necesarias para que las Comisarías de Familia puedan prestar una atención virtual, telefónica y presencial.

De acuerdo a lo anterior, es deber de las alcaldías distritales y municipales:

**a. Garantizar atención virtual y telefónica:**

* Coordinar el uso del teletrabajo.
* Establecer medios telefónicos y virtuales para que las comisarías de familia brinden atención psicosocial y asesoría jurídica, entrevistas y seguimiento de casos.
* Implementar recepción de denuncias por medios telefónicos o virtuales.
* Brindar los medios virtuales para que las comisarías de familia realicen notificaciones y citaciones por medios virtuales o telefónicos.
* Promover la realización virtual de audiencias y sesiones de comités territoriales.
* Informar los medios telefónicos y virtuales de atención.

**b. Garantizar atención presencial de manera excepcional y adecuada para prevenir contagios de COVID-19**

* Adoptar turnos y horarios flexibles de labor que reduzcan la concentración de personas en las comisarías de familia.
* Establecer criterios de priorización y de atención personalizada.
* Autorizar el ingreso únicamente de la persona usuaria, salvo casos en los que sea necesario contar con un acompañante.
* Las instalaciones de las comisarías deben contar con condiciones óptimas de higiene y disponer de elementos antisépticos, de bioseguiridad y protección que prevengan contagios de covid-19.
* Disponer de espacios aislados de atención para niños, niñas y adolescentes y personas adultas mayores.
* Ofrecer medios de transporte adecuados cuando se requiera traslado de víctimas a lugares de protección y aislamiento.

Además, para descongestionar las labores de los comisarios de familia se autorizó a los alcaldes distritales y municipales suspender la función de conciliación extrajudicial en derecho, excepto en los asuntos de custodia, visitas y alimentos de niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, las cuales deben realizarse de manera virtual o presencial, esta última cuando las partes no tengan el acceso a tecnología, caso en el cual debe garantizarse las medidas de aislamiento, protección e higiene.

Incluso, se ordenó a la Fiscalía General de la Nación disponer de canales y articulación y orientación permanente para fortalecer las funciones de policía judicial que desempeñan las Comisarías de Familia.

En este orden de ideas, el Decreto ordenó a los alcaldes distritales y municipales tomar medidas concretas para seguir garantizando el acceso a la justicia a las personas víctimas de violencia en el contexto familiar, suspender algunas funciones de los comisarios de familia, y proteger la salud de los comisarios de familia y personas usuarias, por medio de la atención de manera virtual y telefónica, y cuando deba hacerse presencial, con restricciones de ingreso, horarios de atención y elementos de bioseguridad.

De las seis preguntas, con el correspondiente desglose de la pregunta seis, hemos dado respuesta solo a las que se anotan a continuación, ya que las demás obedecen a información que solo pueden suministrar el INPEC, la USPEC, o el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), en la medida que versan sobre el manejo del COVID-19 en las cárceles y penitenciarías del país, así como de datos acerca del funcionamiento de los establecimientos de reclusión, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penitenciario y Carcelario, razón por la cual estas preguntas fueron remitidas a esas entidades a través de los oficios No. MJD-OFI20-0012374-DPC-3200 y No MJD-OFI20-0012375-DPC-3200.

En cuanto a la pregunta que dicta:

Teniendo en cuenta que la sobrepoblación en los CPYC es de alrededor de 40.000 personas. ***¿consideran que con el Decreto 546 del 14 de abril de 2020 que prevé la excarcelación de unas 4.000 personas, se resuelven los problemas de hacinamiento? ¿se contemplan nuevas medidas de excarcelación? ¿cómo se va a resolver la problemática de la sobrepoblación carcelaria?***

El Ministerio informa que, claramente el Decreto Ley 546 de 2020 no ha sido concebido para resolver los problemas de hacinamiento, solo para mitigarlos en el marco de la emergencia ocasionada por la pandemia del COVID – 19 y favorecer las medidas de distanciamiento social recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). Tras la implementación del Decreto Ley y conforme con el comportamiento de las medidas adoptadas, el Gobierno evaluará otras estrategias jurídicas dirigidas a contener y evitar la propagación del virus.

Cabe señalar, que la problemática de la sobrepoblación carcelaria es una de las líneas estratégicas de la política criminal en lo que corresponde a la criminalización terciaria, en atención de la declaración del estado de cosas de inconstitucionalidad (ECI). Esta línea estratégica conjuga diferentes acciones que van desde aquellas tendentes a contrarrestar el populismo punitivo, hasta la construcción de nuevos y mejores establecimientos, pasando por la aplicación de medidas alternativas a la penalización, como las medidas de justicia restaurativa.

Adicionalmente, es importante mencionar que el Gobierno Nacional tiene prevista la entrega, para el año 2020, de 2040 cupos de infraestructura modular y 1270 de infraestructura rígida, en los Establecimientos de Reclusión de los siguientes municipios:

1. Infraestructura Modular:

* Santa Marta: 510
* Barranquilla: 510
* Cartagena: 510
* Itagüí: 510

1. Infraestructura rígida:

* Girón: 762
* Ipiales: 608

Por último, se debe recordar que, de acuerdo con lo establecido por el artículo 17 de la Ley 65 de 1993, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 133 de la Ley 1955 de 2019 (Plan Nacional de desarrollo 2018-2022), es responsabilidad de los Entes Territoriales destinar parte de sus recursos para la creación, fusión o supresión, dirección, organización, administración, sostenimiento y vigilancia de las cárceles de personas detenidas preventivamente, las cuales, actualmente, son más de 34.000. Dicha responsabilidad, históricamente, no ha sido cumplida por parte de los Entes Territoriales e impacta negativamente el hacinamiento actual.

**V. Proposición 137**

En atención al cuestionario de control político presentado por la Honorable Representante Jennifer Kristin Arias Falla, esta Cartera Ministerial se permite informarle lo siguiente:

***En relación con el artículo 2- Ámbito de aplicación se mencionan los casos en los que aplica la detención preventiva en el lugar de residencia. Sin Embargo ¿qué ocurre en los casos en los que haya cumplido 60 años de edad o padezca de enfermedades posiblemente excarceleables si sus delitos son violencia intrafamiliar, homicidio o acceso carnal violento? también irán a su lugar de residencia?***

No. El Decreto 546 de 2020, establece unas excepciones en las que contemplan la imposibilidad de otorgar beneficios a ciertas personas privadas de la libertad por la gravedad de los hechos y la modalidad de la conducta. De esta manera los delitos por usted mencionados no le permitirían a la persona mayor de 60 años acceder a las medidas prevista en esta normatividad.

En tal circunstancia, en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 5, artículo 6 del mencionado Decreto, frente a las personas que se encuentren en los grupos de mayor vulnerabilidad, esto es, los mayores de 60 años, madres gestantes o con hijo menor de 3 años, personas con enfermedades graves y personas con movilidad reducida, se deberán adoptar las medidas necesarias por parte del INPEC para ubicarlas en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio, con lo que se garantiza, incluso para aquellas personas excluidas del beneficio, su protección y salud.

***¿qué ocurrirá con los reclusos que puedan tener una detención preventiva en su residencia pero sus familiares se nieguen a acogerlo? ¿volverán a la cárcel o el Estado velará por ellos? ¿Cómo?***

Con el inicio del trámite correspondiente a la remisión de los listados, como lo prevé el artículo 7 y 8 del decreto legislativo, la persona privada de la libertad debe coordinar con sus familiares, amigos o persona encargada donde piensa fijar su lugar de residencia, para que sea recibido una vez la autoridad judicial le otorgue la medida. En tal sentido es necesario recordar que el INPEC será el encargado de realizar el traslado al lugar de residencia, para constatar en primera medida que la dirección corresponde a la consignada en el acta de compromiso y en segunda medida constatar que en el lugar de residencia, será acogido. En caso negativo, regresará al establecimiento peniteniario y lugar de detención transitoria a la espera que él mismo establezca donde se podrá ubicar e informar al juez que otorgó la medida.

***¿qué ha pensado el Ministerio de Justicia para aquellos reclusos que pasados seis meses no retornen a terminar de cumplir sus penas?***

Dentro del procedimiento previsto en el Decreto Legislativo, el artículo 10 prevé que que dentro de los cinco (5) días siguientes a la terminación de los seis meses, el beneficiado debe presentarse por su voluntad. En el evento que esto no ocurra, el director del establecimiento penitenciario o carcelario o el lugar de reclusión en el que se encontraba, le comunicará al Juez competente quien decidirá lo pertinente.

***¿para qué fecha se piensa dar inicio con las excarcelaciones?***

En primera instancia, muy respetuosamente es necesario precisar que el término excarcelaciones no corresponde al nombre técnico que se le otorgó a esta medida, sumado a que dicha terminología no es utilizada actualmente por el Código Penal.

Desde el momento mismo de la expedición del Decreto 546 de 2000, empieza su vigencia y su respectiva ejecución, la cual se ha venido trabajando y desarrollando en forma armónica entre el INPEC, el Consejo Superior de la Judicatura y las defensas técnicas de los beneficiados.

De esta manera, con corte 28 de abril, es INPEC informó que se remitió un primer listado a la judicatura con más de 500 registros de los cuales, han sido otorgadas más de 100 medidas por los jueces respectivos y el INPEC se encuentra realizando los traslados al lugar de residencia.

***¿cuánto tiene estimado el Ministerio de Justicia que le tomará a cada juez revisar el caso de cada recluso para que éstos sean cobijados con la medida?***

Esta pregunta fue remitida al Consejo Superior de la Judicatura a través del oficio No. MJD-OFI20-0012449-DPC-3200. Sin embargo, es dable señalar que los artículos 7 y 8 del decreto legislativo establecen unos términos sumamente breves para el trámite, siendo importante destacar que primará el sistema escritural virtual para todas las actuaciones.

Por otro lado, las preguntas que guardan relación con el “CASO: ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO Y CARCELARIO VILLAVICENCIO” se remitieron por competencia de acuerdo el artículo 21 del CPACA, al Instituto Nacional y Penitenciario y Carcelario -INPEC, a través del oficio No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200.

**VI. Proposición 138**

En atención al cuestionario de control político presentado por el Honorable Representante Hernando Guida Ponce, esta Cartera Ministerial se permite informarle lo siguiente:

Las preguntas portan en gran medida sobre el manejo del COVID-19 en las cárceles, así como de datos acerca del funcionamiento de los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC y la USPEC, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penitenciario y Carcelario; razón por la cual, estas preguntas fueron remitidas a esas entidades a través a través de los oficios No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200 y No MJD-OFI20-0012375-DPC-3200.

**VII. Proposición 139**

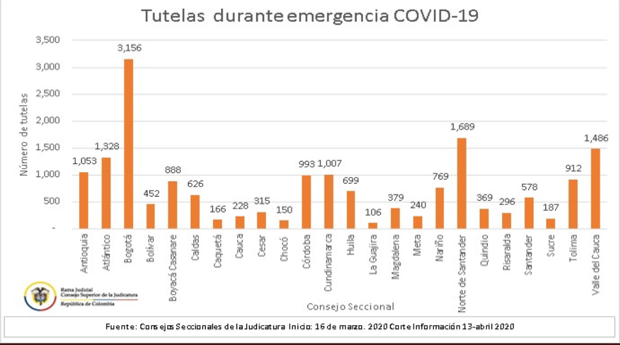
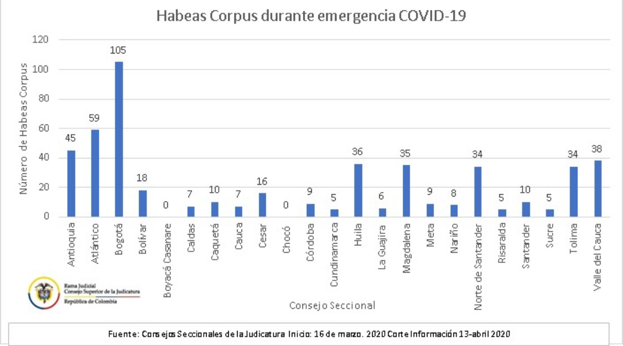
En atención al cuestionario de control político presentado por el Honorable Representante Edwin Ballesteros, esta Cartera Ministerial se permite informar lo siguiente:

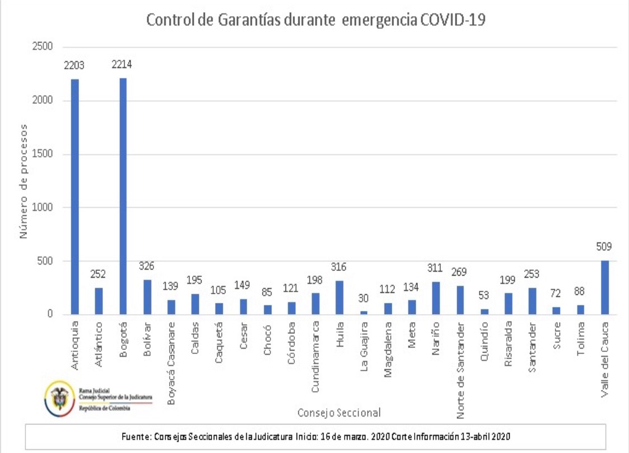
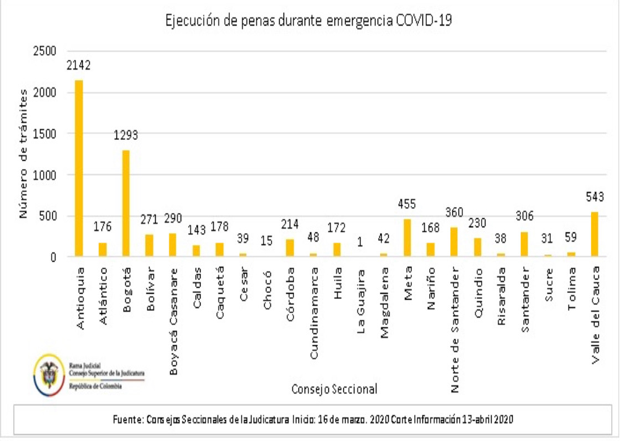
**1- ¿Cuál es el balance de las medidas adoptadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura para afrontar la emergencia económica y social? ¿cómo repercute en materia judicial y acumulación de expedientes?**

El Gobierno nacional expidió los Decretos 460, 469, 491, 564 y 567 encaminados a garantizar la continuidad en la prestación del servicio por parte de las autoridades administrativas que cumplen funciones jurisdiccionales en condiciones de seguridad y salubridad para los usuarios y servidores, y el acceso a la administración de justicia a cargo de los distintos despachos judiciales, teniendo en cuenta, en este caso, las reglas que para el efecto ha dispuesto el Consejo Superior de la Judicatura, en virtud del principio de separación de poderes y el respeto a la autonomía e independencia de la Rama Judicial.

A través de los referidos decretos se ha dado viabilidad a la continuidad en la prestación del servicio por las Comisarías de Familia, se han adoptado medidas para que los métodos alternativos de solución de conflictos como el arbitraje, la conciliación, los trámites de insolvencia de persona natural no comerciante, en la medida que cuenten con las condiciones para hacerlo, puedan seguir funcionando de manera virtual, y para que una vez se levante la suspensión de términos judiciales por el Consejo Superior de la Judicatura los abogados puedan acudir, sin premuras a formular demandas y promover las acciones y medios de control, pues se suspendieron los términos de prescripción, de caducidad, de duración del proceso y el previsto para configurarse el desistimiento tácito. Asimismo, se viabilizó la continuación de procesos de adopción.

Igualmente, desde el inicio de la emergencia sanitaria que dio lugar a la suspensión inicial de términos, el Consejo Superior de la Judicatura ha establecido mecanismos para que ciertos asuntos como la acción de tutela, habeas corpus y ciertas actuaciones penales, no se suspendan.

Como consecuencia de tal medida, se tiene que a corte 14 se abril de 2020, se habían tramitado dichos asuntos así:



De otro lado, respecto de los procesos que no están suspendidos, el Consejo Superior de la Judicatura ha habilitado mecanismos para la radicación de documentos, correos electrónicos y medios virtuales para continuar con el desarrollo de esas actuaciones judiciales.

Es importante precisar que, de acuerdo con lo previsto en el Acuerdo PCSJA-2011546, las actuaciones judiciales que se enuncian en la respuesta a la pregunta número 4 quedaron exceptuadas de la suspensión de términos judiciales, lo que debe redundar en que la afectación de los tiempos de aquellos trámites procesales no se extienda signifcativamente.

Además, le hemos planteado al Consejo Superior de la Judicatura, distintas propuestas enfocadas en la continuidad en la prestación del servicio de justicia en condiciones de seguridad y salubridad para los usuarios y servidores judiciales, algunas promueven la reanudación de procesos judiciales y otras promueven la innovación en el servicio prestado por la Rama Judicial y procuran la optimización en el trabajo haciendo uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.

En consecuencia, debido a que las medidas adoptadas siguen en ejecución, el balance de las mismas es preliminar, sin embargo, esperamos que estas en su conjunto eviten una afectación significativa en cuanto a congestión y permitan garantizar el acceso efectivo al servicio de justicia por parte de todos los ciudadanos.

Las preguntas 2 y 3 hacen referencia a la operatividad del mecanismo establecido a través del Decreto 546 de 2020, particularmente en lo que se refiere al número de personas que saldrán beneficiadas a través de este mecanismo y el control que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario - INPEC ejercerá sobre la efectiva aplicación de estas medidas, razón por la cual estas preguntas fueron remitidas a esa entidad a través del oficio No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200

No obstante, en cuanto a la pregunta No. 3, es menester resaltar que el artículo 8 del Decreto 546 de 2020, establece que el beneficiario deberá suscribir un acta de compromiso, en la cual manifestará que cumplirá con su detención domiciliaria y que regresará al establecimiento dentro de los cinco días hábiles siguientes al vencimiento de término del beneficio (seis meses). Esta acta será remitida al Juez competente.

Por otra parte, el artículo 23 del Decreto Ley, establece la obligación a cargo del INPEC de verificar el cumplimiento de la medida y en caso de que ésta no se cumpla, el beneficio será revocado y el juez competente ordenará el traslado a un establecimiento penitenciario para que la persona continúe cumpliendo su detención preventiva o su pena intramuros.

**4. El Ministerio de Justicia tiene un plan de contingencia para reabrir los Despachos Judiciales? ¿Qué medidas se han adoptado en este sentido?**

Esta decisión por competencia constitucional y legal está en cabeza de la Rama Judicial a través de su órgano de gobernanza: el Consejo Superior de la Judicatura. Sin embargo, desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, remitimos un documento a la Sala Administrativa de esa corporación en el que planteamos diferentes medidas tendientes a mantener el funcionamiento de la administración justicia durante el tiempo de aislamiento y evitar así la congestión judicial. Por ejemplo, propusimos la reanudación de ciertos procesos judiciales que son de importancia para el ciudadano, como las acciones populares, de cumplimiento, de nulidad, de nulidad y restablecimiento del derecho; procesos laborales sobre despidos injustificados o suspensión de contratos; asuntos pensionales; asuntos de familia; casos pendientes de proferir sentencia o aquellos en los que está se pueda dictar de forma anticipada, entre otras.

Por otra parte, es importante anotar que el Consejo Superior de la Judicatura, aunque suspendió los términos judiciales desde el 16 de marzo de 2020, no lo hizo respecto de todos los procesos judiciales y además los empleados y funcionarios judiciales continúan trabajando desde sus casas (ver los acuerdos PCSJA20-11517, PCSJA20-11518, PCSJA20-11519, PCSJA20-11521, PCSJA20-11526, PCSJA20-11527, PCSJA20-11528, PCSJA20-11529 y PCSJA20-11532 de 2020).

El último acuerdo expedido por el Consejo Superior de la Judicatura es el PCSJA20-11546 del 25 de abril de 2020, establece, entre otras medidas las siguientes:

1. Continua la suspensión general de términos en los procesos judiciales hasta el 10 de mayo de 2020, excepto en los siguientes procesos:

* Acciones de tutela y habeas corpus.
* Las actuaciones que adelante la Corte Constitucional con ocasión de la expedición de decretos por el Presidente de la República en ejercicio de las funciones del artículo 215 de la Constitución Política.
* En materia contencioso administrativa: a) Las actuaciones que adelanten el Consejo de Estado y los tribunales administrativos, con ocasión del control inmediato de legalidad. b) El medio de control de nulidad por inconstitucionalidad contra actos administrativos expedidos desde la declaratoria de la emergencia sanitaria. c) El medio de control de nulidad contra los actos administrativos que se hayan expedido desde la declaratoria de la emergencia sanitaria.
* En materia penal. Con relación a la función de control de garantías se atenderán los siguientes asuntos: a. Audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitudes de medidas de aseguramiento de detención. b. Prórroga, sustitución y revocatoria de medida de aseguramiento cuya solicitud sea con persona privada de la libertad, las cuales se adelantarán de manera virtual. c. Peticiones de libertad, las cuales se adelantarán de manera virtual. d. Control de legalidad posterior, que se adelantarán de manera virtual. e. Las solicitudes de orden de captura, las cuales se adelantarán de manera virtual.

La función de conocimiento en materia penal atenderá: a. Los procesos con persona privada de la libertad; las audiencias se harán siempre que se puedan realizar virtualmente. b. Los procesos de Ley 906 de 2004 que se encuentren para proferir sentencia o en los que ya se dictó el fallo. c. Los procesos de Ley 600 de 2000 en que haya finalizado el periodo probatorio del juicio. d. Los procesos en los que esté próxima a prescribir la acción penal. e. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia además continuará atendiendo los trámites que impliquen la libertad inmediata de los procesados en asuntos de casación, extradición, impugnación especial, revisión, definición de competencia, segunda instancia y casos próximos a prescribir, privilegiando el uso de medios electrónicos. f. La Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia continuará atendiendo las actuaciones, diligencias y sesiones en las investigaciones en curso, privilegiando el uso de los medios electrónicos. g. Los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad atenderán las libertades por pena cumplida, con o sin redención de pena, libertad condicional, prisión domiciliaria y formalización de la reclusión, mediante trabajo en casa de manera virtual.

Las actuaciones de los juzgados de responsabilidad penal para adolescentes en el seguimiento de la sanción privativa de la libertad, a partir del informe psicosocial actualizado que será remitido de manera electrónica para que el despacho resuelva, por escrito, lo pertinente de conformidad con los artículos 178 y 187 de la Ley 1098 de 2006, auto interlocutorio que también será notificado por medio electrónico.

* En materia civil: a. Autos que resuelven el recurso de apelación de los proferidos en primera instancia. b. En primera y única instancia, la emisión de sentencias anticipadas, y las que deban proferirse por escrito si ya está anunciado el sentido del fallo. c. El proceso de restitución de tierras consagrado en la Ley 1448 de 2011, con excepción de las inspecciones judiciales y diligencias de entrega material de bienes. Todas aquellas actuaciones o diligencias judiciales del proceso de restitución de tierras que no se puedan hacerse de forma virtual o que requieran el desplazamiento del personal para su realización seguirán suspendidas.
* En materia de familia: a. Procesos de adopción, los cuales se adelantarán de manera virtual. b. Los siguientes procesos que estén en trámite: i. Las medidas de protección en los casos de violencia intrafamiliar, cuando en el lugar no haya comisario de familia. ii. Restablecimiento de derechos por pérdida de competencia de la autoridad administrativa y homologaciones, siempre que se pueda adelantar de manera virtual. iii. Restitución internacional de derechos de niños, niñas y adolescentes, que se adelantará virtualmente. c. Las relacionadas con depósitos judiciales por concepto de alimentos, tendientes a ordenar y autorizar su pago de conformidad con las reglas definidas por el Consejo Superior de la Judicatura.
* En materia laboral: a. Pensión de sobrevivientes cuando haya interés de adultos mayores y/o de menores de edad. b. Incrementos, reajustes y rectroactivos pensionales y auxilios funerarios, ante jueces de pequeñas causas laborales. c. Todos los procesos que tengan solicitud de persona en condición de discapacidad. d. Los procesos escriturales de fuero sindical pendientes de resolver la segunda instancia.
* En materia disciplinaria: Los procesos regidos por la Ley 734 de 2002 que se encuentren para fallo.

1. Los servidores de la Rama Judicial trabajarán de manera preferente en su casa mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, salvo que, de manera excepcional, para cumplir con las funciones o prestación del servicio fuera necesario el desplazamiento o la atención presencial en las sedes judiciales o administrativas.

**5. Una vez terminada la emergencia económica y los colombianos volvamos a la normalidad, los juzgados se reactivarán con un sin número de demandas judiciales en todos los juzgados, especialmente los laborales y civiles, con ocasión de las dificultades de los colombianos para poder honrar sus obligaciones civiles, comerciales y labores ¿Qué plan de contingencia tiene el Ministerio de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura para enfrentar esta situación?**

Los planes de descongestión judicial, así como todo lo relacionado con medidas para solventar la posible presentación masiva de demandas en la Rama Judicial una vez finalice el estado de emergencia sanitaria, es competencia del Consejo Superior de la Judicatura.

En todo caso, en atención al levantamiento progresivo de la suspensión de términos judiciales tal como fue explicada, así como la continuidad de los trámites adelantados a través de métodos alternativos de solución de controversias, en especial mediante conciliación y arbitraje, permitirán que los ciudadanos sigan gestionando sus asuntos ante las autoridades investidas de funciones jurisdiccionales en tiempos similares a los que se venían manejando antes de la emergencia.

Finalmente, es importante mencionar que el Gobierno Nacional expidió el Decreto 560 de 2020, que adopta un régimen de rescate empresarial que permite a las sociedades y personas naturales comerciantes: (i) la negociación de emergencia de acuerdos de reorganización ante la Superintendencia de Sociedades y (ii) procedimientos de recuperación ante las Cámaras de Comercio. Estas figuras permitirán resolver una serie de controversias, principalmente comerciales, en espacios diferentes a los judiciales, lo que en últimas permitirá alivianar la carga de procesos a cargo de la rama judicial.

**6. Cuál es el avance en materia del expediente electrónico y que reformas requiere la administración judicial para que los procesos migren presencialmente a la vía digital?**

**6.1. Avances en expediente electrónico desde el Gobierno Nacional.**

De conformidad con el parágrafo del artículo 186 de la Ley 1437 de 2011[[20]](#footnote-20), es la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura la encargada de implementar el expediente electrónico, razón por la cual se dará traslado de la petición a esta corporación para que dé respuesta a la pregunta.

No obstante, es importante anotar que para el Gobierno Nacional ha sido una prioridad implementar estrategias que permitan una administración de justicia cercana al ciudadano, de allí que se ha abordado este reto como un proceso que involucra reformas legales, administrativas y de gestión, (Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2022 Pacto por Colombia, Pacto por la equidad), que en su conjunto van a permitir acercar la justicia a los ciudadanos, de manera que sus necesidades jurídicas sean debidamente satisfechas.

Así las cosas, una de las metas transformacionales de Gobierno de las que han sido priorizadas por el señor Presidente de la República y que, por tanto, les hace seguimiento directamente la Consejería Presidencial para el Cumplimiento, es el Plan de Transformación Tecnológica de la Rama Judicial, el cual se ha venido liderando desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, con el acompañamiento del Departamento Nacional de Planeación, de la Consejería para la Transformación Digital del Estado y el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Para ello, se suscribió entre el Gobierno Nacional (Minjusticia y MinTIC) con las Altas Cortes y Consejo Superior de la Judicatura, un memorando de entendimiento y su OTROSÍ de prórroga, que contempla una prueba concepto y una prueba piloto en cinco acciones priorizadas por la Rama Judicial con los aspectos necesarios para lograr un modelo de expediente electrónico que sirva de referente para ser implementado en la mayoría de los trámites judiciales. Hoy contamos con una prueba concepto que dará paso a la contratación de la prueba piloto.

De igual forma, en reunión realizada el 5 de agosto de 2019, convocada por el señor Presidente de la República, con magistrados de Altas Cortes y Consejo Superior de la Judicatura, el Gobierno Nacional anunció el apoyo a la Rama Judicial, para acudir a un empréstito de la banca multilateral, para el desarrollo del proyecto de Expediente Digital y en general el Plan de Transformación Tecnológico en la Rama Judicial. Para el efecto, se adelantaron por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, entre octubre del año pasado y febrero de este año, tres misiones para la estructuración del crédito y nos encontramos junto con la Rama Judicial, impulsando su trámite para contar con esta financiación lo más pronto posible.

En paralelo, el Ministerio de Justicia y del Derecho lidera con el acompañamiento del Ministerio Tic y la Consejería Presidencial para la Transformación Digital del Estado, el proyecto de expediente digital en las entidades públicas del orden nacional con funciones jurisdiccionales, lo cual nos va a permitir la interoperabilidad entre los dos sistemas. Este proyecto se encuentra consignado tanto como meta del Plan Nacional de Desarrollo como en el CONPES 3975 de 2019.

**6.2. Reforma administración de justicia.**

Por otra parte, en el informe de ponencia para primer debate del proyecto de Ley No. 007 de 2019, *“POR MEDIO DE LA CUAL SE REFORMA EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO – LEY 1437 DE 2011 – Y SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE DESCONGESTIÓN EN LOS PROCESOS QUE SE TRAMITAN ANTE ESTA JURISDICCIÓN”*, presentando por el gobierno nacional con el Consejo de Estado se modifica el artículo 186, para que el Consejo Superior de la Judicatura incorpore lo referente a sede electrónica judicial, las formas de identificación y autenticación digital, la interoperabilidad de los sistemas de información,  la acreditación y representación de los ciudadanos por medios digitales,  la tramitación electrónica de los procedimientos judiciales, el expediente judicial electrónico,  el registro de documentos electrónicos, la protección de datos personales, los lineamientos de cooperación digital,   la seguridad digital, y cualquier otro instrumento para la transformación de la jurisdicción contenciosa administrativa.

De igual forma, en las instancias de articulación que se tienen conformadas con las Altas Cortes y Consejo Superior de la Judicatura para el proyecto de la prueba piloto del expediente digital en acciones priorizadas por la Rama, se hará la identificación y análisis de necesidades normativas que resulten necesarias para la implementación del expediente digital. Ahora bien, en el marco de los avances de estructuración de un proyecto de reforma estatutaria a la justicia el Ministerio de Justicia y del Derecho ha propuesto algunas normas de gobierno judicial que priorizan las gestiones relacionadas con tecnología en la prestación del servicio de justicia.

**VIII. Proposición 140**

En atención al cuestionario de control político presentado por la Honorable Representante Martha Villalba, esta Cartera Ministerial se permite informar lo siguiente:

De los dos grupos de preguntas con el correspondiente desglose de la pregunta dos, hemos dado respuesta solo a las que se anotan a continuación, ya que las demás obedecen a información que solo pueden suministrar el INPEC, la USPEC, o el Consejo Superior de la Judicatura (CSJ), en la medida que versan sobre el manejo del COVID-19 en las cárceles y penitenciarías del país, así como de datos acerca del funcionamiento de los establecimientos de reclusión, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penitenciario y Carcelario, razón por la cual estas preguntas fueron remitidas a esas entidades a través de los oficios No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200, No MJD-OFI20-0012375-DPC-3200 y No. MJD-OFI20-0012449-DPC-3200.

En cuanto a la pregunta que dicta:

***¿Qué medidas de choque ha tomado el Gobierno Nacional en el marco de la emergencia carcelaria para mejorar la sanidad de los centros penitenciarios, para prevenir el contagio masivo del COVID – 19?***

Nos permitimos indicar que dentro de las medidas tomadas oportunamente por el Gobierno Nacional están: La Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020 a través del cual el Ministerio de Salud y Protección Social declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID–19 y adoptó medidas sanitarias con el objeto de prevenir y controlar la propagación del COVID-19 en el territorio Nacional y mitigar sus efectos; la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, mediante el Decreto No. 417 del 17 de marzo de 2020, con el fin de conjurar la grave calamidad pública que afecta al país por causa del COVID – 19 y la expedición del Decreto Ley 546 del 14 de abril de 2020, por medio del cual se adoptan medidas para sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimientos penitenciarios y carcelarios por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias en el lugar de residencia a personas que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente al COVID – 19, y se adoptan otras medidas para combatir el hacinamiento carcelario y prevenir y mitigar el riesgo de propagación, en el marco del Estado de emergencia Económica, Social y Ecológica. Esto, aunado a que el INPEC declarara el Estado de Emergencia Penitenciaria y Carcelaria en los establecimientos de reclusión del orden Nacional, mediante la Resolución 1144 del 22 de marzo de 2020, la cual permite mejorar la sanidad de los mismos, en la medida en que se han acogido una serie de directivas tendentes a la prevención y atención del contagio en las personas privadas de la libertad (PPL).

***¿Cuál es la posición del Gobierno Nacional frente a la iniciativa de dejar salir internos a cumplir su pena sustituyendo casa por cárcel?***

La iniciativa de sustituir la pena de prisión y la medida de aseguramiento de detención preventiva por la prisión domiciliaria y la detención domiciliaria transitorias refleja que la posición del Gobierno ha sido la de prevenir y mitigar el riesgo de propagación, combatiendo el hacinamiento que haría más gravosa la situación. Por ello expidió el Decreto Legislativo 546 del 14 de abril de 2020 en los términos que quedó definido.

***¿Cuáles delitos serían los inmersos en esta medida?***

Las personas a quienes aplica la medida de detención y prisión domiciliarias transitorias son las que están incursas en los delitos que no fueron enlistados como excluidos en el artículo 6° del Decreto Ley 546 de 2020, es decir, cerca del 65% de los tipos penales descritos en la Ley 599 de 2000 quedan incluidos en la medida transitoria, versus un 35% que quedan excluidos de la medida.

***¿Bajo qué medidas y condiciones de vigilancia estará la población a la que se le permita cumplir su pena desde el hogar?***

Estarán bajo las mismas medidas y condiciones que se siguen para cualquier persona que se encuentra en prisión domiciliaria, conforme con lo descrito en el artículo 38C del Código Penal, esto es, el control que ejerce el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con el apoyo del INPEC, quien realizará visitas periódicas y emitirá los correspondientes informes, como lo prevé el artículo 23 del decreto legislativo 546 de 2020 referido a control de las medidas y el artículo 24 referido al incumplimiento por parte del beneficiario

***¿Qué mecanismos de verificación y control se establecieron para el traslado, reclusión y reintegro a los sitios de reclusión carcelarios de la población objeto de la medida de casa por cárcel?***

Como lo ha previsto el Decreto Ley 546 de 2020 en su artículo 10°, una vez vencido el término de la medida de detención o prisión domiciliaria transitorias, el cobijado con ella deberá presentarse, dentro de los cinco (5) días hábiles, al establecimiento penitenciario o carcelario o al lugar de reclusión en el que se encontraba al momento de su otorgamiento. Esto sugiere que las PPL deberán acudir a los establecimientos por sus propios medios, so pena de que, vencido el término iniciado, se configuren las conductas previstas en el artículo 448 del Código Penal (fuga de presos).

***¿El gobierno nacional contempla otorgar algún subsidio a la población carcelaria más vulnerable que será beneficiada por casa por cárcel?***

No se han contemplado subsidios de auxilio o ayudas económicas de ninguna naturaleza, en virtud de que estos tampoco existen en condiciones regulares de reclusión o para las personas que ya gozaban de la prisión o la detención domiciliaria antes de la pandemia, apelando al derecho a la igualdad. Ello, sin perjuicio de los subsidios que las familias de las PPL puedan llegar a recibir por parte del Gobierno, pero asociados a factores o condiciones distintas a las de tener un miembro de la familia en condición de persona privada de la libertad, como, por ejemplo, los que se otorgan a personas del programa “Ingreso solidario”. En todo caso es importante señalar que se les garantizará el acceso a los servicios de salud.

***¿Cuáles son los planes a corto plazo del Gobierno Nacional frente a la política penitenciaria y carcelaria y frente a la política criminal?***

Frente a la política penitenciaria y carcelaria, como componente de la política criminal, resulta apremiante, entre otras cuestiones, superar el Estado de Cosas de Inconstitucinales (ECI) señalado en la sentencia T-762 de 2015, que se resume, básicamente, en lo siguiente:

*“(i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (iii) (SIC) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iv) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos; (v) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (vi) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.”*

Dentro de las acciones a corto plazo están previstas el fortalecimiento del Observatorio de Política Criminal, la realización de estudios que involucran a la sociedad civil y la academia para el desarrollo de indicadores basados en evidencia científica, la consolidación del sistema de información unificado y el estudio e implementación de penas alternativas, aspectos todos en los que viene trabajado la Dirección de Política Criminal y PenitenciarIa del Ministerio de Justicia y del Derecho.

**IX. Proposición 142**

En atención al cuestionario de control político presentado por el Honorable Representante Julián Peinado Ramírez, esta Cartera Ministerial se permite informar lo siguiente:

De las diez preguntas formuladas en su proposición, hemos dado respuesta solo a las que se anotan a continuación, ya que las demás obedecen a información que solo pueden suministrar el INPEC o la USPEC, en la medida que versan sobre el manejo del COVID-19 en las cárceles y penitenciarías del país, así como de datos acerca del funcionamiento de los establecimientos de reclusión, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penitenciario y Carcelario, razón por la cual estas preguntas fueron remitidas a dichas entidades a través de los oficios No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200 y No MJD-OFI20-0012375-DPC-3200.

En cuanto a la pregunta que dicta:

***¿Cuántas personas se espera que se beneficien de la medida de detención preventiva o prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia que se dispone el en Decreto Legislativo 546 de 2020?***

Conforme con los cálculos realizados, se estima que cerca de cuatro mil (4.000) personas podrían verse beneficiadas con las medidas transitorias.

***¿Qué estrategias se implementarán en favor de quienes se encuentran en alguno de los casos contemplados en el artículo 2 del decreto legislativo 546 de 2020, pero que no puedan acceder a la detención preventiva o prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia por encontrarse en las exclusiones?***

En virtud de lo dispuesto en el parágrafo 5, artículo 6 del mencionado Decreto, frente a las personas que se encuentren en los grupos de mayor vulnerabilidad, esto es, los mayores de 60 años, madres gestantes o con hijo menor de 3 años, personas con enfermedades graves y personas con movilidad reducida, se deberán adoptar las medidas necesarias por parte del INPEC para ubicarlas en un lugar especial que minimice el eventual riesgo de contagio, con lo que se garantiza, incluso para aquellas personas excluidas del beneficio, su protección y salud

Por otro lado, dichas personas estarán sometidas a los protocolos de atención definidos por el INPEC y el Instituto Nacional de Salud (INS), así:

Mediante la directiva 004 del 11 de marzo de 2020, el INPEC estableció los protocolos para prevenir la infección al interior de los centros de reclusión que incluyen las pautas de lavado de manos, las cuales fueron socializadas por el prestador de servicios en salud y los funcionarios del área de seguridad y salud en el trabajo, así como el correcto uso de los elementos de protección personal, como el tapabocas FFP2 o N95, las correctas maneras de estornudar o toser, la ventilación e iluminación de espacios y las estrategias de distanciamiento social, así como el fortalecimiento de los exámenes médicos de ingreso de las PPL. En esta misma directiva se señaló la importancia de realizar búsquedas activas de personal con sintomatologías respiratorias, especialmente en las poblaciones de mayor riesgo y de quienes hayan estado en contacto estrecho con los casos confirmados, definición que también se incluye en la misiva, la cual se acompaña del formato de seguimiento a contactos de casos de IRA asociados al nuevo coronavirus 2019 (COVID – 19). La información fue divulgada de manera visible en todos los establecimientos y se ordenó al personal del INPEC descargar en sus equipos móviles la aplicación CORONAAPP, diseñada por el Instituto Nacional de Salud. La directiva incluye la ruta de acción ante probables casos y casos confirmados de COVID – 19, que incluye las acciones frente al personal que entra en contacto con el enfermo y los procedimientos de aseo y desinfección de las áreas contaminadas y las estrategias de educación y capacitación a la población sobre la enfermedad y todo lo que de ella se conoce hasta el momento, por fuentes oficiales. Finalmente, la directiva señaló los procedimientos de toma de medidas para la definición de casos confirmados, en sintonía con la circular externa 000005 del Instituto Nacional de Salud y el documento de *“Manejo de brotes en población privada de la libertad”* del Ministerio de Salud y de la Protección social y las acciones y medidas urgentes de gestión de insumos para los ERON.

Por su parte, el anexo 01 de la directiva 004, del 12 de marzo de 2020, además de lo anterior dispuso suspender TODAS las visitas de personal externo, así mimo, adecuar dentro de los establecimientos lugares de aislamiento temporal; restringir el acceso de personas provenientes de estaciones de policía y centros transitorios, repatriados y visitas de oficinas consulares; la realización de entrevistas, documentales y similares; mantener la realización de audiencias virtuales; reforzar medidas para el ingreso de personal externo que de manera obligatoria deben ingresar para cumplen labores de las actividades propias de los establecimientos; restringir los remisiones a lo estrictamente necesario (por ejemplo, los requerimientos médicos); la restricción de desplazamiento de los PPL con procesos infecciosos por pasillos y patios o la manipulación de alimentos; evitar los traslados de patios; reforzar el adecuado manejo de los residuos hospitalarios; mantener abastecidos los expendios y fijar horarios para el ingreso de abogados.

La circular 019 del 16 de abril de 2019 con su correspondiente anexo, sobre la aplicación de lineamientos para el control, prevención y manejo de casos por COVID – 19 para la población privada de la libertad en Colombia, aparte de reiterar las medidas ya descritas, hace mención expresa al tiempo de duración de 14 días a las personas puestas en aislamiento por presunto contagio; la recomendación de no compartir elementos de uso personal, ni alimentos de los que pueda resultar contagio. Establece, además, normas de uso de la mascarilla quirúrgica y respiradores de alta eficiencia; las medidas de comunicación sanitarias; los procedimientos para la evaluación de existencias de productos de higiene, suministros, especialmente los médicos y los de limpieza y su reabastecimiento inmediato. Se señalaron, también, las vías de acceso a la atención médica, como exámenes de ingreso, atención de urgencias y consultas extramurales programadas; la definición operativa de los casos, conforme con la sintomatología presentada por los internos y su historial clínico y las rutas de procedimiento y notificación a las autoridades de salud, en cada uno de los supuestos. Este anexo incluye las prácticas de prevención frente a áreas comunes, actividades de recreación, comidas, actividades de grupo y alojamiento; las prácticas de limpieza y desinfección; las prácticas de higiene saludable; el manejo de aislamiento, incluido el aislamiento por cohortes, en términos de tiempo, cuarentena de contactos cercanos y uso de mascarillas.

La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios - USPEC, a través del Consorcio Fondo de Atención en Salud PPL, responsables de la efectiva prestación del servicio de salud en los Establecimientos de Reclusión del Orden Nacional (ERON) y mediante la contratación de las diferentes OPS (Orden de prestación de servicios) y prestadores del servicio extramural, definió que las OPS (médicos, enfermeras, Auxiliares de enfermería, Odontólogos, Auxiliares de Odontología e Higienistas Orales), así como los diferentes operadores intramurales (VIH, Laboratorio, Salud Mental) y extramurales (La Red de salud contratada en el Municipio y/o Departamento), deberán garantizar la debida prestación del servicio salud a la PPL, teniendo en cuenta los protocolos de atención del COVID--19, además se les instruyó fortalecer las medidas en la realización del EMI – Examen Médico de Ingreso y de la encuesta de Tamización al personal que ingresa a los establecimientos a fin de identificar casos probables y sintomáticos respiratorios. Por bioseguridad todo el personal de salud debe utilizar los elementos de protección necesarios para la atención de los internos. Las OPS deben estar en un estado de salud óptimo de tal manera que no generen ningún foco de contagio para la PPL y que ellos tampoco se vean afectados. Las OPS encargadas del programa de crónicos deben realizar un seguimiento estricto del estado de salud de los PPL que pertenecen a estos programas (especialmente personas mayores de 60 años e inmunosuprimidos). Se garantiza, con el laboratorio contratado por el Consorcio, la respectiva toma de muestras dentro del ERON, además se toman las medidas necesarias para evitar el traslado de internos entre patios del establecimiento, se recomienda que el personal de salud se desplace a los patios a fin de atenderlos y no realizan desplazamientos de la PPL a consulta externa extramural, salvo controles de Alto Riesgo.

Es importante mencionar, además, que teniendo en cuenta la situación que actualmente se está presentado en Salud a nivel país, al ser un Evento de Interés en Salud Pública, la prestación del servicio de salud intramural ampliará su cobertura a PPL de régimen Contributivo (Cabe aclarar que la prestación del servicio de salud intramural a esta población, será únicamente por la contingencia que se está presentando actualmente por el COVID-19 en el país; en caso que el Interno que pertenece a régimen contributivo requiera traslado a la red externa, este será atendido por su respectiva EPS quien se encargará prestar la atención requerida cuando sea necesaria la misma).

***¿Qué estrategia se implementará para los hijos e hijas de madres que no puedan acceder a la medida de detención preventiva o prisión domiciliaria transitorias en el lugar de residencia por encontrarse en las exclusiones del artículo 6°?***

Conforme a lo establecido en el artículo 8° del Decreto 2553 de 2014, se tiene que: “*Sin perjuicio de las competencias definidas en el presente Decreto, todas las entidades que hacen parte del SNBF concurrirán, cada una, desde el ámbito de sus competencias, en la protección y garantía de los derechos fundamentales de los niños y niñas menores de tres (3) años que conviven con sus madres internas en los establecimientos de reclusión para mujeres, así como de las internas gestantes y lactantes".* Estos menores serán ubicados con sus acudientes, conforme a lo establecido en el artículo 10 del Decreto 2553 de 2014,que dispone: *“La custodia del niño o niña menor de tres (3) años que convive con su madre interna en establecimiento de reclusión, corresponde a ésta”*; por lo anterior estos niños y niñas no cuentan con un proceso de restablecimiento de derechos abierto con el ICBF, el cual debería iniciarse si no hubiese nadie diferente a la madre que pudiese hacerse cargo.

***¿Qué estrategias se implementarán a favor de niñas, niños y adolescentes que se encuentran en el SRPA?***

En ejercicio de la Presidencia del Sistema Nacional de Coordinación de Responsabilidad Penal para Adolescentes- SNCRPA, de acuerdo con las funciones asignadas por el Decreto 1885 de 2015, a continuación, se enuncia la gestión adelantada por el Ministerio de Justicia y del Derecho:

Medidas de contingencia a adoptarse en el SRPA.

1. Diagnóstico situacional del SRPA en el marco de la emergencia:

Como una de las primeras acciones para efectuar la articulación interinstitucional requerida para la adopción de medidas especiales en el SRPA, desde el correo electrónico de la Presidencia del SNCRPA (marzo 24), se solicitó a los miembros del SNCRPA y a los Comités Departamentales/Distrital de la instancia de coordinación la remisión de las medidas y acciones de contingencia adoptadas por dichas instituciones, en el marco de la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, establecida por el Gobierno Nacional mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 a raíz de la propagación del COVID-19:

Hasta el momento se ha recibido la siguiente información:

**Fiscalía General de la Nación:** Se confirma la atención en todas las Direcciones Seccionales del país en las unidades de responsabilidad penal para adolescentes. Se cuenta con disponibilidad de fiscales para actos urgentes de acuerdo con las directrices de los directores Seccionales de Fiscalías y del CSJ. Las audiencias de conocimiento se adelantan de manera virtual.

**Policía Nacional – Infancia y adolescencia:** el Director General de la Policía Nacional emitió el Comunicado Oficial N° S-2020-016372-DIPON del 24 de marzo de 2020, donde se establecen los procedimientos y medidas de policía a adoptarse en el marco del estado de emergencia. En este entendido, se han implementado acciones puntuales para el SRPA, en materia de cuidado de los efectivos, traslados de los adolescentes, directrices respecto de visitas y se está construyendo la “Ruta de atención para policías que efectúen aprehensión de adolescentes en conflicto con la ley penal”.

**Defensoría del Pueblo:** Se emitió la Circular No. 4 del 18 de marzo de 2020, donde se dan orientaciones para la prestación del servicio de Defensoría Pública en el marco de la situación de emergencia sanitaria. Algunas de las medidas son: implementación de medios virtuales para entrevistas, audiencias, atención de personas privadas de la libertad (medios escritos y virtuales) y otras diligencias.

De igual forma, se recibió información del Ministerio de Cultura, Colombia Joven y el Sena, siendo en total seis (6) respuestas de miembros del SNCRPA y veinticinco (25) por parte de los Comités Departamentales/Distrital.

**Los comités Departamentale/Distritales que ya enviaron sus reportes (25): son**: Cundinamarca, Huila, Vaupés, Caquetá, Cesar, Nariño, Vichada, Casanare, Boyacá, Cauca, Risaralda, Santander, Tolima, Putumayo, Meta, Sucre, San Andrés, Antioquia, Caldas, Amazonas, Guainía, Guaviare, Atlántico, Valle del Cauca y el comité distrital de Bogotá D.C.

**Los comités que a la fecha no han enviado reporte son**: Arauca, Bolívar, Norte de Santander, Córdoba, Magdalena, Chocó, Guajira y Quindío.

Es importante señalar que esta información se ha remitido oportunamente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, con el fin de que analicen la pertinencia de las acciones propuestas por las entidades y comités para atender las necesidades actuales de los adolescentes en conflicto con la ley.

Ahora bien, respecto de las medidas especiales a aplicarse en el SRPA, se está realizando un estudio jurídico de manera conjunta con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar- ICBF, para definir la viabilidad de adoptar medidas especiales para operativizar el sistema.

De acuerdo con lo expuesto, y por tratarse de un asunto de competencia del ICBF se ha dado traslado mediante MJD-OFI20-0012426-DPC-3200 para que dé respuesta a este interrogante teniendo en cuenta las competencias que les asigna la ley frente al SRPA.

**X. Proposición 143, aditiva 13**

Las preguntas tratan en gran medida sobre el manejo del COVID-19 en las cárceles, así como de datos acerca del funcionamiento de los establecimientos de reclusión a cargo del INPEC, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penitenciario y Carcelario; razón por la cual estas preguntas fueron remitidas a esa entidad a través del oficio No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200.

[Con respecto a la pregunta 7 que versa sobre las adecuaciones físicas que se han realizado a las celdas del complejo carcelario y penitenciario de Picaleña, para atender a los internos diagnosticados como positivos para COVID-19, ésta fue también remitida a la USPEC a través del oficio No MJD-OFI20-0012375-DPC-3200](https://epx.minjusticia.gov.co/ElectronicDocument/EditExplorer?electronicDocId=eAJ2rhD%2B2Dtdzhsed13ZGw%3D%3D)

**XI. Proposición 144**

En atención al cuestionario de control político presentado por la Honorable Representante María Villalba, esta Cartera Ministerial se permite informar lo siguiente:

Las preguntas 1 a la 7, fueron remitidas al INPEC a través del oficio No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200.

Con relación a la pregunta 8:

*¿Existen casos puntuales, de personas privadas de la libertad, que puedan verse beneficiadas con la medida transitoria del Decreto 546 y que la Fiscalía General de la Nación, como ente acusador, se oponga a que apliquen estos beneficios? De ser así ¿cuántos son estos casos y en qué centros penitenciarios se encuentran estas personas?*

Véase que lo establecido en el Decreto 546 de 2020, es un marco objetivo de obligatorio cumplimiento para los jueces, eso si y solo sí, cuando se cumplen todas las exigencias establecidas en el instrumento jurídico.

En cuanto a su pregunta, no se puede tener certeza del quantum hasta tanto no se realicen las solicitudes en forma puntual y se desarrollen las audiencias ante los jueces de garantías y de ejecución de penas, y se saque el contenido estadístico. Se precisa, que estamos ejecutando y desarrollando el contenido material del mandato, adicionando que el ente investigador como sujeto procesal puede ejercer el recurso de apelación dentro de los contenidos del debido proceso.

**XII. Proposición 145**

En atención al cuestionario de control político presentado por la Honorable Representante María Villalba, esta Cartera Ministerial se permite informar lo siguiente:

De las diecisiete preguntas formuladas en su proposición, hemos dado respuesta solo a las que se anotan a continuación, ya que las demás obedecen a información que solo pueden suministrar el INPEC, o la USPEC, en la medida que versan sobre el manejo del COVID-19 en las cárceles y penitenciarías del país, así como de datos acerca del funcionamiento de los establecimientos de reclusión, de acuerdo con lo dispuesto en el Código Penitenciario y Carcelario, razón por la cual estas preguntas fueron remitidas a esas entidades a través de los oficios MJD-OFI20-0012374-DPC-3200 y No MJD-OFI20-0012375-DPC-3200.

En cuanto a la pregunta que dicta:

*¿Qué medidas reales y efectivas se han tomado frente al grave problema de hacinamiento que ya va por el 53% por encima de la capacidad para alojar la población carcelaria?*

La problemática de la sobrepoblación carcelaria es una de las líneas estratégicas de la política criminal en lo que corresponde a la criminalización terciaria, en atención de la declaración del Estado de Cosas de Inconstitucional (ECI), señalado en la sentencia T-762 de 2015, que se resume, básicamente, en lo siguiente:

*“(i) la vulneración masiva y generalizada de varios derechos constitucionales que afecta a un número significativo de personas; (ii) la prolongada omisión de las autoridades en el cumplimiento de sus obligaciones para garantizar los derechos; (iii) (SIC) la adopción de prácticas inconstitucionales, como la incorporación de la acción de tutela como parte del procedimiento para garantizar el derecho conculcado; (iv) la no expedición de medidas legislativas, administrativas o presupuestales necesarias para evitar la vulneración de los derechos. (v) la existencia de un problema social cuya solución compromete la intervención de varias entidades, requiere la adopción de un conjunto complejo y coordinado de acciones y exige un nivel de recursos que demanda un esfuerzo presupuestal adicional importante; (vi) si todas las personas afectadas por el mismo problema acudieran a la acción de tutela para obtener la protección de sus derechos, se produciría una mayor congestión judicial.”*

La línea estratégica del Ministerio de Justicia y del Derecho, conjuga diferentes acciones que van desde aquellas tendentes a contrarrestar el populismo punitivo, hasta la construcción de nuevos y mejores establecimientos, pasando por la aplicación de medidas alternativas a la penalización, como las medidas de justicia restaurativa.

***Informe la razón por la cual el decreto 546 de 2020 se expidió hasta el 14 de abril, cuando desde el 23 de marzo fue declarada la emergencia carcelaria y penitenciaria****.*

La expedición de un decreto legislativo de esta naturaleza, sin antecedentes en el ámbito doméstico e internacional, generó la necesidad de socializar con las entidades involucradas y otros actores, con el fin de conocer sus observaciones y opiniones a fin de enriquecerlo y articularlo de la mejor manera posible. Lo que se pretendía era organizarlo de una forma en que la operatividad resultara más expedita y ágil.

***¿Se ha considerado permitir otro tipo de pena privativa; diferente a la intramural, para mujeres embarazadas y lactantes y personas de la tercera edad, ¿con el fin de descongestionar las cárceles y evitar riesgos de salud en esta población vulnerable?***

A la fecha la Dirección de Política Criminal y Penitenciaria, junto con otras instancias del Ministerio de Justicia y del Derecho, trabajan en estrategias de alternatividad penal y medidas restaurativas, como medidas diferentes a la privación de la libertad intramural.

**XIII. Proposición aditiva 12**

Respecto a las preguntas de la 1 a la 4, referentes a cómo se está manejando la atención en las Defensorías de Familia, comisarías de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar desde el momento en que fue ordenado el aislamiento obligatorio, así como los protocolos que se deben manejar, nos permitimos indicarles que estás preguntas fueron remitidas por competencia al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar mediante oficio MJD-OFI20-0012444-DPC-3200

La pregunta 5, con sus cinco literales está referida al manejo de protocolos de seguridad y salubridad y el número de pruebas rápidas para la población carcelaria, aspectos estos relacionados con la operatividad y manejo al interior de los establecimientos carcelarios, preguntas éstas a ser resueltas por parte del ámbito del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, razón por la cual estas preguntas fueron remitidas a esa entidad a través del oficio No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200

**XIV. Proposición cuestionario Harry González García**

En relación con las preguntas No. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 19, 20 y 21, las cuales hacen referencia en gran medida al manejo del COVID-19 en las cárceles, así como de datos acerca del funcionamiento de los establecimientos de reclusión a cargo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario – INPEC, así como de las acciones que ejercerá sobre la efectiva aplicación de las medidas contempladas en el Decreto Legislativo 546 de 2020, le informamos que estas preguntas fueron remitidas a esa entidad a través del oficio No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200.

Las preguntas 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 16 y 20 hacen referencia al manejo del COVID-19 en las cárceles y solicitan información acerca de las medidas que la USPEC ha adoptado en relación con el personal médico vinculado mediante prestación de servicios y el cumplimiento de turnos a cargo de estos, razón por la cual esta pregunta fue remitida a dichas entidades a través del oficio No. MJD-OFI20-0012375-DPC-3200

En las preguntas 17 y 18, de la proposición se manifiestan una serie de interrogantes relacionados con el manejo de la administración de justicia, en lo que refiere a indicar si existe o no un plan de contingencia para que los jueces de la República brinden apoyo a los jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad a efectos de hacer frente a la congestión judicial que existe y dar aplicación al Decreto Legislativo 546 de 2020 y, si con la imposición de medidas de aseguramiento intramurales decretadas por los jueces de control de garantías, se están ordenando traslados a centros de reclusión a los privados de libertad, o si están siendo trasladados a sus lugares de residencia dada la situación actual de riesgo de contagio de COVID-19, razón por la cual dichas peticiones fueron remitidas por competencia al Consejo Superior de la Judicatura a través del oficio No. MJD-OFI20-0012449-DPC-3200

No obstante, en cuanto a la pregunta No. 18, es menester resaltar que el artículo 27 del Decreto 546 de 2020, establece que, por el término de tres meses, quedan suspendidos los traslados de personas con medida de aseguramiento de detención preventiva y personas condenadas que se encuentren en los centros de detención transitoria como las estaciones de policía y Unidades de Reacción Inmediata, a los establecimientos penitenciarios y carcelarios del orden Nacional por cuenta del INPEC.

Por otra parte, ese mismo artículo del Decreto, establece la obligación a cargo de las entidades territoriales de adelantar las gestiones necesarias para así garantizar las condiciones de reclusión de las personas privadas de la libertad, en dichos centros de detención transitoria.

**XV. Proposición aditiva Juan Carlos Wills**

En atención al cuestionario de control político presentado por el Honorable Representante Juan Carlos Wills Ospina, esta Cartera Ministerial se permite informarle lo siguiente:

Las preguntas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 10, fueron remitidas al INPEC a través del oficio No MJD-OFI20-0012374-DPC-3200.

Con relación a las preguntas 7, 9 y 10, se debe indicar lo siguiente:

*¿Qué incidencia tiene la garantía constitucional de la presunción de inocencia en la selección de los destinatarios del Decreto Legislativo 546 de 2020?*

Sea lo primero en advertir que la presunción de inocencia es un derecho fundamental a la luz del marco constitucional, los protocolos, tratados e instrumentos internacionales (art. 93 C.P) y la reitera jurisprudencia de dicha corporación.

En ese orden de ideas, ha de decirse que el derecho fundamental de la presunción de inocencia se mantiene indemne, cuando en el marco de una actuación procesal, el Juez de Control de Garantías que obstenta, una función constitucional, a solicitud de la Fiscalía General de la Nación o de las víctimas (artículo 306 de la ley 906 de 2004), profiere una medida cautelar de tipo personal y no punitiva, consistente en la privación de la libertad de manera provisional; tal realización se afianza en los derechos y deberes constitucionales que, en sentido estricto, consisten en asegurar el cumplimiento de las decisiones judiciales que se adoptan en el proceso y garantizar la presencia del imputado o acusado en el mismo para que sea efectiva, de una parte, y la investigación y juzgamiento y, de otra los derechos de las víctimas.

Véase que tal medida es transitoria, preventiva porque su finalidad no es sancionatoria, ni está dirigida a resocializar y mucho menos ejemplarizar, su debito o estándar está dirigido a asegurar el resultado exitoso del proceso penal, obsérvese que la Corte Constitucional, ha sido reiterada y uniforme en tal pronunciamiento tal y como se advierte en su precedente judicial de orden constitucional (C- 106 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández Galindo), T—827 de 2005 (M.P. Humberto Sierra Porto.), T- 331 de 2007 (M.P. Jaime Córdoba Triviño), T. 774 de 2001 ( M.P. Rodrigo Escobar Gil), C- 289 de 2012 ( M.P. Humberto Sierra Porto))

Adicionalmente se ha manifestado por dicha corporación: “*De ahí el carácter provisional que le subyace a la resolución de acusación “ y la vigencia que durante el lapso en que ella este vigente tiene la presunción de inocencia”* (C- 416 de 2002 (M.P. Clara Inés Vargas), pero además, en sus propios precedentes ha manifestado, reiteradamente que la resolución de acusación no es una sanción ni tiene carácter definitivo, el sindicado o imputado según el sistema procesal de enjuiciamiento, goza de todos los derechos fundamentales y pueden hacerlos efectivos, donde enfatiza que la resolución de acusación no comporta por tanto: *“restricción alguna de las garantías constitucionales, entre ellas la presunción de inocencia que permanece incolume mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia judicial en firme.”* (T- 827 de 2005 (M.P. Humberto Sierra Porto). En este sentido, el Gobierno nacional entiende que la presunción de inocencia de una persona *“se mantiene indemne”* y sin alteración alguna dentro de los contenidos constitucionales.

En los que *no se mantiene indemne* tal presunción de inocencia, es cuando una vez surtidos todos los trámites procesales propios de cada proceso de acuerdo a lo decantado en el artículo 29 de nuestra carta política, se declara responsable penalmente al encartado y se le aplica la sanción prevista en la ley (C- 106 de 1994 (M.P. José Gregorio Hernández) y T-827 de 2005 (M.P. Humberto Sierra Porto), y dicha decisión se encuentra debidamente ejecutoriada.

***¿Cuál es el fundamento práctico de la doble intervención, administrativa y judicial, en la implementación de las sustituciones de detención y prisión domiciliaria?***

Como se puede avizorar dentro de los contenidos motivos del Decreto ley 546 de 2020, su génesis yace de un estado de excepción, dentro del cual se deben tomar medidas excepcionales; por tal circunstancia el Ministerio de Justicia y del Derecho, hace parte de la estructura u organización del Estado y del Gobierno nacional, dentro de los contenidos de redivisión del poder (artículo 113 de la C.P.), más exactamente en la Rama Ejecutiva (artículo 115 inciso 2 de la C.P.); es de establecerse que el Presidente y el Ministro, en cada negocio en particular constituyen Gobierno (artículo 115 inciso 2 de la C.P.). Adicional a ello, dentro de sus competencias regladas, se establece el diseño y seguimiento y control de la política criminal, carcelaria y penitenciaria, entre otras, por tales razones dentro del marco del artículo 215, en concordancia con el 212 y 213 de la Constitución Política, y atendiendo la grave calamidad pública y su declaratoria dentro del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica, y observando el núcleo esencial del principio de solidaridad y colaboración armónica entre las diferentes ramas del poder público, se hizo necesario la intervención administrativa y judicial, y así lograr los cometidos consagrados en el Decreto 546 de 2000.

***Aparte de la sustitución de la detención y prisión intramuros por domiciliaria transitoria, ¿el Ministerio tiene previsto ordenar otras medidas como el cumplimiento anticipado de la pena, la libertad condicional por cumplimiento de los requisitos objetivos, y beneficios para quienes se encuentren en los regímenes de mediana y mínima seguridad?***

El Gobierno nacional, a la fecha, está evaluando otras las medidas que permitan conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos.

Cordialmente,

|  |
| --- |
| ORIGINAL FIRMADO |

**JAVIER AUGUSTO SARMIENTO OLARTE**

Viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa

Anexos: Oficios No. MJD-OFI20-0012374-DPC-3200, MJD-OFI20-0012375-DPC-3200, MJD-OFI20-0012444-DPC-3200, MJD-OFI20-0012449-DPC-3200, MJD-OFI20-0012426-DPC-3200 a través del cual se remite su petición por competencia al INPEC, USPEC, CSJ y al ICBF.

Elaboró : Grupo de Política Criminal

Revisó : María Alejandra Troncoso/ Nicolás Murgueitio

Aprobó : Javier Augusto Sarmiento Olarte

http://vuv.minjusticia.gov.co/Publico/FindIndexWeb?rad=eYN4stTnV1kKr7RGnneGyW9PN995T4yG7BW8p3SKu7U%3D&cod=jgTvIDEkqvTdMJEziJEgqQ%3D%3D

1. **Artículo 186.** Actuaciones a través de medios electrónicos. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita se podrán realizar a través de medios electrónicos, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.

   **Parágrafo.** La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para que en un plazo no mayor de cinco (5) años, contados a partir de la vigencia del presente Código, sea implementado con todas las condiciones técnicas necesarias el expediente judicial electrónico, que consistirá en un conjunto de documentos electrónicos correspondientes a las actuaciones judiciales que puedan adelantarse en forma escrita dentro de un proceso.  [↑](#footnote-ref-1)
2. Ley 294 de 1996, artículo 9°, modificado por la Ley 575 de 2000, artículo 5. [↑](#footnote-ref-2)
3. **Decreto 1069 de 2015, Artículo****2.2.3.8.1.3.** [↑](#footnote-ref-3)
4. Ley 294 de 1996, artículo 9, modificado por la Ley 575 de 2000, artículo 6. [↑](#footnote-ref-4)
5. Ley 294 de 1996, artículo 11, modificado por la Ley 575 de 2000, artículo 6°. Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.8.1.7. [↑](#footnote-ref-5)
6. **Decreto 1069 de 2015, Artículo 2.2.3.8.1.7.** [↑](#footnote-ref-6)
7. Ley 294 de 1996, artículo 12, modificado por la Ley 575 de 2000, artículo 7. [↑](#footnote-ref-7)
8. Ley 294 de 1996, parágrafo del artículo 12, modificado por la Ley 575 de 2000, artículo 7 [↑](#footnote-ref-8)
9. Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.8.1.5. [↑](#footnote-ref-9)
10. Ley 1257 de 2008, artículo 8. Decreto 1069 de 2015, **artículo****2.2.3.8.2.6.** [↑](#footnote-ref-10)
11. Ley 294 de 1996, artículo 15, modificado por la Ley 575 de 2000, artículo 9. [↑](#footnote-ref-11)
12. **Decreto 1069 de 2015, artículo****2.2.3.8.1.5** [↑](#footnote-ref-12)
13. Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.8.2.5. [↑](#footnote-ref-13)
14. Ley 294 de 1996, artículo 16, modificado por Ley 575 de 2000, artículo 10. [↑](#footnote-ref-14)
15. Conforme con los artículos 17 y 18 de la Ley 1257 de 2008. Decreto 1069 de 2015, artículo 2.2.3.8.2.4 [↑](#footnote-ref-15)
16. Literales d) y e) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008. [↑](#footnote-ref-16)
17. Literales f) y g) del artículo 17 de la Ley 1257 de 2008. [↑](#footnote-ref-17)
18. Corte Constitucional, Sentencia T-462 de 2018 M.P. Antonio José Lizarazo Ocampo [↑](#footnote-ref-18)
19. Decreto 1069 de 2015, numeral 8 del artículo 2.2.3.8.2.4 [↑](#footnote-ref-19)
20. **Artículo 186.**Actuaciones a través de medios electrónicos. Todas las actuaciones judiciales susceptibles de surtirse en forma escrita se podrán realizar a través de medios electrónicos, siempre y cuando en su envío y recepción se garantice su autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. La autoridad judicial deberá contar con mecanismos que permitan acusar recibo de la información recibida, a través de este medio.

    **Parágrafo.** La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptará las medidas necesarias para que en un plazo no mayor de cinco (5) años, contados a partir de la vigencia del presente Código, sea implementado con todas las condiciones técnicas necesarias el expediente judicial electrónico, que consistirá en un conjunto de documentos electrónicos correspondientes a las actuaciones judiciales que puedan adelantarse en forma escrita dentro de un proceso.  [↑](#footnote-ref-20)